La afectación a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas en el marco del Proceso de Justicia y Paz y la afectación a la reconstrucción de la memoria histórica con la extradición del máximo comandante del estado mayor de las Autodefensas Unidad de Colombia,

Salvatore Mancuso Gómez

Nelson Eduardo Menjura González

Trabajo de Grado para optar al título de

Magíster en Derechos Humanos

Director

Dr. Javier Alejandro Acevedo Guerrero

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Derecho y Ciencia Política

Maestría en Derechos Humanos

Bucaramanga

2022

Dedicatoria

He pasado numerosos días y noches enteras leyendo, tomando apuntes y construyendo la presente tesis que fue motivada y dedicada a mi señora madre Anita, mi esposa Aleja, mis hijos Ginna, Yous y Richard y significativamente, a las múltiples víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes inspiran en mi el amor por los estudios de derecho transicional. Quiero finalmente agradecer a mi Director de tesis, Dr. Javier Alejandro Acevedo y a mis profesores, tutores y compañeros de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander que guiaron paso a paso, el escabroso camino que conduce al fin propuesto en esta tesis, resaltar la prevalencia de los derechos de las víctimas como materialización de los Derechos Humanos en Colombia.

Tabla de Contenido

	Pág.
1. Introducción.....	11
2. Justificación.....	13
3. Objetivos.....	15
3.1. Objetivo General	15
3.2. Objetivos Específicos	15
4. Capítulo I. Génesis y metamorfosis del paramilitarismo en Colombia.....	16
4.1. Etapas del paramilitarismo en Colombia.....	19
4.2. Las huellas oscuras del paramilitarismo en Colombia	25
5. Capítulo II Historia de la extradición en Colombia.....	31
5.1. Las Clases de extradición y la extradición en Colombia.....	33
6. Capítulo III El derecho a la justicia, entendida como verdad, reparación y no repetición, en el marco de la justicia transicional.....	38
6.1. Marco legal Internacional de protección a las víctimas	40
7. Capítulo IV. Estudio de caso. La afectación a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del proceso de Justicia y Paz con la extradición del Salvatore Mancuso Gómez	64
7.1. De las víctimas	65
7.2. De la Extradición.....	66
8. Conclusiones y recomendaciones.....	88
9. Referencias Bibliográficas.....	92

Lista de tablas

Tabla 1.....19

Glosario

Abstenerse: no participar en algo a lo que se tiene derecho.

A Cabalidad: completamente.

Albores: principios o primeros tiempos.

Aludida: afectada; referirse a una persona, sin nombrarla.

Alinearon: ponerse en una misma línea o tendencia ideológica.

Asimétricas: desproporcionadas, desiguales.

Atroces: cruel, inhumanos, descomunal, grande.

Auspicio: patrocinio, ayuda.

Auspiciadores: patrocinadores.

Beneplácito: aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa.

Captore: capturan, atrapan.

Cierne: que esta en preparación o en desarrollo.

Coadyuvar: contribuir o ayudar a conseguir algo.

Consolidación: consolidar, conformar.

Chiquita Brands: empresa multinacional dedicada a la producción de plátano.

Década: periodo de diez -10- años.

Declive: inclinación, caída.

Desolación: vacío, dolor, tristeza.

Emanada: origen, procede, deriva.

Enclenque: débil , delgado.

Énfasis: destacar, resaltar, importancia.

Esbozan: dicen, refieren.

Externalizada: percepciones, pensamientos.

Fachada: parte o cara visible.

Fructíferas: que producen fruto.

Frustró: v dejar sin efecto, malograr un intento.

Gama: serie de cosas.

Génesis: origen o principio de una cosa.

Gestó: nació, empezó.

Incuestionable: claro para los sentidos o para la inteligencia; que no puede ser cuestionado.

Interacción: relación entre dos o mas personas o cosas.

Lesivos: que causa lesiones o perjuicios.

Magistral: que se destaca por su perfección y relevancia.

Metamorfosis: cambio o transformación.

Ostentar: tener un título o cargo con autoridad o prestigio.

Paquidérmica: lenta.

Perpetrados: realizar o efectuar algo.

Repatriar: devolver al alguien a su patria natal.

Rezagada: dejar atrás, atrasar, suspender por un tiempo.

Soporte: apoyo o sostén.

Unísono: que tiene el mismo tono o sonido.

Vaivén: movimiento alternativo; cambio o variación.

Victimológico: relativo a los procesos de victimización.

Resumen

Título: La afectación a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas en el marco del Proceso de Justicia y Paz y la afectación a la reconstrucción de la memoria histórica con la extradición del máximo comandante del estado mayor de las Autodefensas Unidad de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez¹

Autor: Nelson Eduardo Menjura González**

Palabras claves: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Justicia y Paz, Derechos de las Víctimas, Extradición, impunidad.

Descripción

El texto reconstruye los inicios del paramilitarismo en Colombia y su transformación de grupos de Autodefensas en apartados organizados de poder vinculados al narcotráfico y su desmovilización en virtud del proceso de justicia transicional con la Ley 975 de 2005, denominada *Ley de justicia y paz*. Posteriormente, se elabora una caracterización conceptual de la figura de la extradición en Colombia a partir de los antecedentes jurisprudenciales y legales. Así mismo, se relaciona el derecho a la justicia, verdad y reparación, como principios básicos del proceso de Justicia y Paz; la política del estado sobre la extradición y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la verdad y finaliza con la primacía entre la extradición y el derecho a

¹ Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Derechos Humanos.

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Derecho y Ciencia Política. Director Javier Alejandro Acevedo.

la verdad. De otra parte, se analiza el fenómeno de la extradición en el contexto del proceso de Justicia y Paz concluyendo con la extradición de Salvatore Mancuso Gómez en pleno desarrollo del proceso de Justicia y Paz desde la óptica de las víctimas y las partes integrantes del proceso transicional, sobre las bases normativas, constitucionales y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reclaman el retorno de Mancuso a Colombia a cumplir con los compromisos adquiridos al interior del proceso de justicia transicional. Finalmente, se construye una reflexión sobre las implicaciones de la extradición de Salvatore Mancuso en lo relacionado con la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, concluyendo que dicho acto cercenó los derechos de las víctimas consagrados en el sistema de justicia transicional.

Abstract

Title: The impact on the rights to truth, justice and reparation of the victims in the framework of the Justice and Peace Process and the impact on the reconstruction of historical memory with the extradition of the highest commander of the General Staff of the Self-Defense Unit of Colombia, Salvatore Mancuso Gomez

Author: Nelson Eduardo Menjura González

Keywords: Human Rights, International Humanitarian Law, Justice and Peace, Victims' Rights, Extradition, impunity.

Description

The text reconstructs the beginnings of paramilitarism in Colombia and its transformation from self-defense groups into organized sections of power linked to drug trafficking and their demobilization by virtue of the transitional justice process with Law 975 of 2005, called the Justice and Peace Law. Subsequently, a conceptual characterization of the figure of extradition in Colombia is elaborated from the jurisprudential and legal antecedents. Likewise, the right to justice, truth and reparation is related as basic principles of the Justice and Peace process; the state's policy on extradition and the International Law of Human Rights to the truth and ends with the primacy between extradition and the right to the truth. On the other hand, the phenomenon of extradition is analyzed in the context of the Justice and Peace process, concluding with the extradition of Salvatore Mancuso Gómez in full development of the Justice and Peace process from the perspective of the victims and the integral parts of the transitional

process, on the normative and constitutional bases and the pronouncements of the Inter-American Court of Human Rights, which demand the return of Mancuso to Colombia to comply with the commitments acquired within the transitional justice process. Finally, a reflection is built on the implications of the extradition of Salvatore Mancuso in relation to the guarantee of the rights to truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition, concluding that said act curtailed the rights of the victims. enshrined in the transitional justice system.

1. Introducción

La motivación que generó el presente trabajo de investigación tiene su génesis en el cumplimiento de los componentes de verdad, justicia y reparación y el papel que desempeñaron las víctimas dentro del proceso de Justicia y Paz, reglado por la ley 975 de 2005; la importancia de las víctimas, su preponderante y esencial actividad, en la normatividad al interior del proceso, por parte de sus protagonistas.

Así pues, la investigación se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, el concepto de varios autores, la génesis y la metamorfosis; las características que lo rodearon y las etapas en la historia de Colombia a partir del nacimiento, desmovilización y el proceso de Justicia y Paz. En el segundo capítulo, se hace referencia a la extradición, el concepto general, la reseña histórica de dicha institución en Colombia; los antecedentes jurisprudenciales y los cambios de postura respecto del tema de extradición relacionados con los periodos presidenciales. En el tercer capítulo, se relaciona el derecho a la justicia, verdad y reparación, como principios básicos del proceso de Justicia y Paz; la política del estado sobre la extradición y el derecho Internacional de los derechos humanos a la verdad y finaliza con la primacía entre la extradición y el derecho a la verdad.

En el cuarto capítulo, se aborda el fenómeno de la extradición en el contexto del proceso de Justicia Transicional, en concreto la extradición de los exparamilitares a los Estados Unidos y la extradición y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la verdad; concluyendo con la extradición de Salvatore Mancuso Gómez en pleno desarrollo del proceso de Justicia y Paz desde la óptica de las víctimas y las partes integrantes del proceso transicional, sobre las bases normativas, constitucionales y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, que reclaman el retorno de Mancuso a Colombia a cumplir con los compromisos adquiridos al interior del proceso de justicia transicional.

En el apartado final, se relacionan los conceptos y conclusiones en relación a la afectación del proceso de Justicia y Paz con la extradición de los comandantes paramilitares, a partir de la permanencia de algunos de ellos en Estados Unidos, después de purgar las penas por las cuales se les extraditó y el pensamiento de las víctimas en el caso concreto de Salvatore Mancuso, adentrándonos en la respuesta a la pregunta en relación a qué derecho debe prevalecer, si el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas o el derecho de los Estados a la justicia ordinaria en cumplimiento de los compromisos internacionales.

2. Justificación

El trabajo permite visualizar las distintas fases del paramilitarismo en Colombia, en la génesis, desde distintos puntos de vista, como lo son los mismos desmovilizados, varios autores y autoridades que generan la construcción de un concepto evolutivo que transitó por varias etapas y que no culminó con las desmovilizaciones masivas de las estructuras denominadas bloques Catatumbo, Córdoba, Norte, Central Bolívar, Centauros y Puerto Boyacá entre otras, sino por el contrario, permitió el nacimiento de nueva generación atomizada y más violenta (López, 2010).

Se efectuó un análisis del fenómeno paramilitar inicialmente auspiciado y regulado por el Estado como autodefensas, dentro de una política contra insurgente y luego apoyada por las élites políticas, de ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para definir las distintas etapas que marcaron la presencia en las regiones con estelas de violencia, sangre y desplazamiento.

El trabajo estudia la Ley 975 de 2005, como la primera de las normas emitidas para regular el proceso de desmovilización de los paramilitares, norma cuya esencia fueron las víctimas del conflicto armado; sin embargo, el presente trabajo demostrará cómo las víctimas pasaron a un segundo plano, para darle prioridad a la aplicación de la justicia ordinaria y a los convenios internacionales, dentro de la cual se contempla el mecanismo de la extradición, que permitió el envío de Salvatore Mancuso a los Estados Unidos.

La extradición se convirtió en un arma que soslayó la verdad y generó impunidad en el proceso de justicia y paz, tal como quedó en evidencia desde el inicio de las versiones, en el año 2006, cuando por una decisión sorpresiva del presidente Álvaro Uribe Vélez, se autorizó la extraditados a los Estado Unidos de los máximos comandantes de las desmovilizadas AUC, entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, en el caso específico de él, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos refirió: “constituye una flagrante obstrucción de justicia” y fue más allá para concretar “que si bien ambos gobiernos anunciaron su intención de implementar mecanismos de cooperación judicial en estos casos que involucran a los paramilitares extraditados, el Estado no ha informado a las víctimas ni a sus representantes sobre las gestiones y solicitudes presentadas a las autoridades de los Estados Unidos de América en relación con el proceso interno que involucra a Mancuso, ni sobre diligencias judiciales o mecanismos que garanticen la participación de las víctimas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009); dejando sentado desde esa época, la trascendencia de la presencia y participación directa del postulado ex comandante del Bloque Catatumbo dentro del proceso de Justicia y Paz, en términos de justicia, verdad y reparación.

El presente trabajo abordará la problemática suscitada con la decisión de extradición de los jefes paramilitares y la repercusión directa al proceso de justicia y paz, que les permita a las víctimas conocer las afectaciones que generaron, no solo respecto de la errónea decisión de extradición, sino de la ausencia de un plan metodológico que permitiera suplir la nueva panorámica del proceso, constituida a partir de la ausencia material del postulado. De allí la importancia de ahondar en los presupuestos teleológicos que motivaron la extradición del mencionado jefe paramilitar, en detrimento de las garantías de verdad, justicia, reparación y no repeticiones inherentes al proceso de justicia transicional.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Analizar los motivos que llevaron a la extradición a los Estados Unidos, del paramilitar Salvatore Mancuso Gómez², excomandante de los bloques Catatumbo Córdoba, Norte y Montes de María y si realmente, esa extradición implicó una afectación sustancial a las víctimas del proceso de justicia y paz, en términos de acceso a la justicia, a la verdad y reparación en el marco del proceso de Justicia y Paz.

3.2. Objetivos Específicos

3.2.1. Determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron la emisión de la resolución que autorizó la entrega por extradición, del ex paramilitar SMG a los Estados Unidos, no obstante haber sido suspendida para los desmovilizados de las autodefensas o paramilitares, en atención a la protección de intereses superiores del derecho a la verdad, reparación y justicia.

3.2.2. Establecer cómo se desarrolló el cumplimiento del compromiso de justicia, verdad y reparación del postulado Mancuso Gómez, antes de la extradición a los Estados Unidos y como se afectó el mismo compromiso en las distintas diligencias del proceso de justicia y paz con posterioridad a la extradición.

3.2.3. Precisar si se presentaron afectaciones de los derechos de las víctimas en el proceso de justicia y paz, con la extradición de SMG a los Estados Unidos.

² Salvatore Mancuso Gómez, en adelante SMG.

4. Capítulo I. Génesis y metamorfosis del paramilitarismo en Colombia

Son variados los textos, autores e incluso instituciones particulares y estatales que se han pronunciado respecto del origen del paramilitarismo en Colombia (Velásquez, 2007) a partir de lo cual he construido un compendio, que considero es el más acertado respecto de este fenómeno que como “leviatán” se convirtió en una máquina asesina que sembró de sangre y terror los campos y las ciudades Colombia.

En primer lugar, entramos a conceptualizar qué es el paramilitarismo o las autodefensas. Escritores como German Sahid, señalan que los grupos de autodefensas son “aquellos a los que el Estado les dio la capacidad para armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente”. Lo antes referenciado, nos podría llevar a concluir que son grupos auspiciados (patrocinados o favorecidos) por el Estado e incluso, resulta coherente señalar que ha sido una política del Estado colombiano, que se remonta, en lo que concierne a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, a los años noventa con el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, *Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada*, avalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-572 de 1997, la cual, frente a las llamadas Convivir, destacó que los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada podían utilizar las armas de uso civil.

Afirmó asimismo la citada sentencia que las Convivir eran una materialización del derecho a la legítima defensa colectiva. Conviene en este punto hacer referencia a las declaraciones del ex comandante paramilitar SMG, quien afirmó que “... yo ya había sido reclutado por el estado, por las fuerzas militares, por la brigada 11, por el mayor y eso era conocido por toda la brigada (...) pues yo sigo yendo a la brigada y poniéndome a disposición de ellos porque me llamaban, ... y yo seguí en la misma situación en la que me había adoctrinado anteriormente”; más adelante dice, “en la Escuela Superior de Guerra el tema de

conversación era la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la lucha contraguerrillera” (Mancuso, 2012, p. 2958).

Así lo ratifican desde los inicios de las versiones de Justicia y Paz³, otros de los comandantes medios del Bloque Catatumbo, Jorge Iván Laverde Zapata y José Bernardo Lozada Artúz, lo ratificaron en sus versiones. Para explorar esta génesis de los grupos armados auspiciados por el Estado colombiano, es importante ubicarnos temporalmente, en la fecha de creación de grupos armados autorizados legalmente –Convivir⁴–, creados para combatir la subversión.

Acudiendo el origen remoto, a las raíces originarias de esta política del Estado colombiano denominada antisubversiva, es prudente recordar que al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, se presentó la llamada “Guerra Fría”, que dividió al mundo en dos bloques, uno capitalista –occidental, liderado por EEUU y otro comunista –oriental encabezado por la URSS, periodo en el cual cada cual buscaba reclutar países para respaldar y robustecer su modelo económico y político; Colombia, cercano territorial y políticamente a Estados Unidos, recibe la visita en el año 1962, del general del Ejército de los EEUU, William Yarborough, comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg en Carolina

³ “...hubo colaboración de organismos del Estado, a partir de Enero de 2000, cuando llegué y hasta 2004, fecha de desmovilización; incluso estuve en reunión con el Dr. JORGE DÍAZ director regional del DAS., también hubo coordinación con el General MARTÍN ALONSO CARREÑO, desde que fue comandante de la Quinta Brigada..., incluso cuando él fue comandante general del Ejército. Hubo otra reunión con un mayor que se identificó como alias PACO, quien venía directamente de Bogotá, ... se mostraban los sitios de desembarco de unas tropas del Ejército que llegaría a la zona en 20 días, denominada Brigada contra el Narcotráfico, la idea era tenerlas presentes para no chocar contra ello; ... CAMILO ordenó no disparar a las tropas ni a las aeronaves que desembarcaban, dos meses después, al retiro de la tropa, bajó de nuevo el Mayor y dio las gracias por la seguridad prestada y que quedábamos en contacto. Además a la zona permanentemente bajaban Capitanes, Mayores Coroneles, para hacer coordinaciones con las autodefensas para operativos (Legalización de Cargos Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde y otros, diligencia del 25 de julio de 2021, Mag. Dra. Alexandra Valencia Molina.).

⁴ Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada.

del Norte⁵; oficial que instigó la creación de organizaciones de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista, al igual que la organización de grupos de defensa, más tarde conocidos como “paramilitares”, lo que a la postre instituyó las bases normativas supuestamente contrainsurgentes, con el auspicio y control de las fuerzas armadas, consideradas pública, jurisprudencial e incluso materialmente, como un fin del Estado. Al respecto, Velásquez (2007, pp. 134-135) argumenta que “el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento”.

La historia demuestra ciertamente que el Estado colombiano ha legislado avalando los grupos de civiles armados o autodefensas privadas; verbigracia, el Decreto 3398 de 1965 autorizó los grupos civiles armados y la Ley 48 de 1968 y el Decreto 815 de 1989 ratificaron la existencia de dichos grupúsculos de seguridad privada. El decreto 356 de 1994 –Las Convivir–; El Decreto 2794 de 1997 –redes de seguridad– y finalmente la citada sentencia de constitucionalidad C-572 de 1997, todo lo cual generó en el territorio colombiano el surgimiento y consolidación de 414 Convivir, con más de 120.000 integrantes, según informes de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; entre ellas, una dirigida por Salvatore Mancuso Gómez, quien a la postre se convertiría en comandante no solo de una, sino de cuatro estructuras paramilitares, conocidas como Bloques Córdoba, Norte, Montes de María y Catatumbo.

⁵Escuela de Guerra Especial del Ejército de EE. UU. La escuela tenía la tarea de desarrollar la doctrina, las técnicas, el entrenamiento y la educación del personal de las Fuerzas Especiales y Operaciones Psicológicas, expandida a operaciones de contrainsurgencia.

4.1. Etapas del paramilitarismo en Colombia

El desarrollo de los grupos de paramilitares o autodefensas tiene una génesis y una evolución; para una mejor ilustración y atendiendo a episodios específicos, resulta pertinente ubicarlas en tres etapas, a saber:

Tabla 1.

Etapas del paramilitarismo en Colombia

ETAPAS PARAMILITARISMO EN COLOMBIA		
Época	Periodo	Contexto
Primera	De 1965 de 1997	De la legalización del paramilitarismo con el Decreto 3398 de 1965 hasta la expedición de la Sentencia C-572 de 1997.
Segunda	De 1997 a 2002	Transformación de las autodefensas en grupos paramilitares después de su desmonte normativo a través de la Resolución 7164 de 1997 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Tercera	De 2002 a 2006	Consolidación de los grupos paramilitares como organizaciones antsubversivas ligadas al narcotráfico hasta la materialización del proceso de desmovilización denominado Justicia y Paz.

Nota: Esta tabla muestra las etapas del paramilitarismo en Colombia.

El primer periodo es el comprendido entre 1965 –civiles armados– y el año 1997, con la expedición de la Sentencia de Constitucionalidad de las convivir, C-572 de 1997. Se presenta la primera etapa de la metamorfosis de los grupos de civiles armados o justicia privada. Primero se autorizó la entrega de armas a los civiles entre 1965 y 1994, para la defensa de sus bienes y la anti subversión y, posteriormente, aparecen las Convivir, denominadas: “el motor de la guerra paramilitar” (Verdad Abierta, 2017), lo cual encuentra respaldo en lo señalado por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Justicia y Paz, en las sentencias alternativas dictadas contra Salvatore Mancuso Gómez, ex comandante del Bloque Catatumbo y, otra más dictada en contra de Ever Veloza García alias HH, ex integrante del Bloque Bananero y Calima de las Auc; en ésta última señala que “bajo la fachada de las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales” (Corte Suprema de Justicia, 2015). Este lapso se caracteriza por la legalidad de las organizaciones privadas armadas expandidas a lo largo y ancho de nuestro país, creadas durante el gobierno del entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) y transitando por el periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), como grupos al servicio de la defensa de los derechos de terratenientes, comerciantes, ganaderos e incluso narcotraficantes, que sirvieron como grupo o tropa de apoyo a los Fuerzas Armadas estatales de Policía y Ejército, en la lucha contrainsurgente.

En este orden de ideas, se puede considerar este periodo como la plataforma de lanzamiento y expansión de los grupos paramilitares; en relación con las Convivir, quedó como verdad judicial en sentencia en contra del ex paramilitar Mancuso Gómez:

“En 1994, mediante el Decreto 356 se autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, *CONVIVIR*, cuyo propósito era

colaborar con la Fuerza Pública acopiando información para prevenir las actividades de la insurgencia; además, propendía por organizar las comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, con el fin de proporcionar la vigilancia y la seguridad privada a sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera su sede (Corte Suprema de Justicia, 2015).

La segunda etapa (Año 1997 a 2002) se da transformación de autodefensas a paramilitares –ilegalidad plena–. Se inicia a partir de la limitación de su accionar, integrantes y el porte de armamento, en gracia de la aludida Sentencia C-572 de 1997, lo que generó el desmonte normativo de las Convivir, a través de la Resolución 7164 de 1997, cuyo artículo primero ordenó Revocar el artículo 1º de la Resolución 368 del 27 de abril de 1995, en el sentido de abolir la denominación “Convivir”, dada a los “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada”, también otorgada equivocadamente a los “servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada y a su vez, con lo cual se marcó el inicio de la ilegalidad de varios de sus miembros que terminaron como comandantes de los grupos de autodefensas que inicialmente respondía, aparentemente, a la lucha antsubversiva, en la que incluyeron el asesinato de integrantes de las guerrillas del ELN, FARC, EPL, entre otros y los simpatizantes e integrantes de la izquierda democrática y el partido comunista, como de defensores de Derechos Humanos y sindicalistas, estos últimos, por el simple hecho de ser tachados como pertenecientes del ala política de la subversión. Etapa que se desarrolla entre el año 1997 –desmonte de las Convivir– y el año 2003 con el inicio de los diálogos de Paz bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A partir de la década de 1997, nuestro país estructuró la lucha antsubversiva, como la principal y más importante política de Estado, lo que permitió, por ausencia del Estado en

regiones apartadas, por omisión, cuando no por acción directa, la creación, expansión y operatividad de los grupos de paramilitares. Una de estas regiones fue el departamento de Norte de Santander, hasta allá y cumpliendo las amenazas que hiciera en medios de comunicación Carlos Castaño⁶, llegaron los tentáculos de los paramilitares, esa zona fue tan impactada por los ilegales, que se dio una connivencia de paramilitares, Ejército y Policía, cuando no patrullaba uno al lado del otro en las zonas rurales, se presentaban partidos de fútbol entre los mismos actores, en las áreas urbanas y más trascendental aún, se generaron miles de víctimas de homicidio, desapariciones, desplazamiento y delitos relacionados con violencia basada en género. Así se constata en las distintas versiones y sentencias alternativas de justicia y paz, entre ellas, las dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá, en los casos de Salvatore Mancuso Gómez, Jorge Iván Laverde Zapata y José Bernardo Lozada; ratificado por los desmovilizados del grupo de autodefensas, por la Fiscalía General de la Nación e igualmente por el informe presentado por el periódico El Espectador. Estos dos últimos menciona a los paramilitares como organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la lucha “anticomunista” (El Espectador, 2013).

Es en el marco de esta política de lucha antiterrorista radicalizada por el Estado colombiano, cuando, de manera coincidente, se genera el apogeo, expansión y consolidación de los grupos paramilitares en Colombia; entre 1997 a 2002, refieren varios autores y medios de comunicación, “fue al época clave del paramilitarismo, al grado tal que se constituyó las

⁶ La llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a las tierras nortesantandereanas no fue un secreto para nadie, el propio Carlos Castaño, jefe paramilitar de las AUC, lo anunció. El 15 de marzo de 1999, desde algún lugar en medio del Nudo del Paramillo, concedió una extensa entrevista al periódico El Tiempo y sin mayor reparo dijo que el principal escenario de confrontación con la guerrilla sería el Catatumbo. “El país tendrá que entender lo que va a suceder allí”, sentenció (El Espectador, 2015).

Autodefensas Unidas de Colombia AUC” (Verdad Abierta, 2008), estaban integradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, como una federación de grupos regionales que se replicó en todo el país, con un crecimiento sin precedentes.

La tercera etapa de la metamorfosis de las autodefensas, años 2002 a 2006, se configura con la consolidación de los grupos de paramilitares, transformación que obedece, de acuerdo con lo publicado por el periódico El Espectador, a organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista” (El Espectador, 2013), impulsadas por los militares, la derecha y los narcotraficantes que encontraron en un Estado considerado como débil, el caldo de cultivo ideal para estructurar, bajo supuestas ideologías antisubversivas, la defensa de sus intereses particulares, con la creación y financiación de grupos de justicia privada, siendo los más reconocidos *Muerte a Secuestradores (MAS)*, el *Escuadrón de la Muerte*, *Muerte a Abigeos (MAOS)*, *Prolimpieza del Valle del Magdalena*, *Movimiento Anticomunista Colombiano*, el *Escuadrón Machete*, *Muerte a Invasores*, *Colaboradores y Patrocinadores (MAICOPA)* y *La Mano Negra*. Es en este periodo que se da la más alta expansión en el territorio nacional, de los grupos paramilitares, así como la consolidación de su proyecto político militar.

Con base en la reconstrucción del contexto de los hechos presentados en el proceso de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005–, a partir de las entrevistas, versiones, conceptos de historiadores, postulados y distintos autores; aunado al conocimiento de causa del fenómeno criminal en el país, por la asistencia a más de quinientas versiones y la lectura de las sentencias dictadas contra integrantes de las estructuras ilegales Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Córdoba y Bloque Montes de María, es posible urdir un concepto colombiano de paramilitares como grupos armados ilegales organizados estructuralmente, con presencia en varias regiones

del país, creados inicialmente con un fin de lucha antiterrorista, pero que posteriormente mutaron a paramilitares y terminaron convirtiéndose en un grupo delincencial de sicarios que respondía a sus propios intereses del narcotráfico y terratenientes que bajo el manto de la lucha antiterrorista cooptaron primero pequeñas regiones apartadas y luego, ante la ausencia o el olvido del Estado⁷ o apoyados por militares, policías, miembros de la Fiscalía, así como por políticos, empresarios e incluso por multinacionales como Chiquita Brands (El Tiempo, 2007), se expandieron por más del ochenta por ciento del territorio nacional, sembrando de terror, de sangre y de víctimas, los campos y las ciudades. La referida acepción encuentra soporte en lo expresado por Waldmann, al señalar que “ la principal razón de emergencia el paramilitarismo fueron las presiones ejercidas por los grupos guerrilleros, en un contexto caracterizado por un Estado débil, incapaz de controlar la situación en zonas alejadas de la capital” (2007, p. 258) y por Zelik, quien refiere que el paramilitarismo “... representó un híbrido entre: 1) una estructura paralela, tercerizada o externalizada con la que el Estado, fiel a las estrategias asimétricas modernas, trata de reducir los costos políticos de la contrainsurgencia; 2) un ejército privado, al servicio de amplios sectores del gran empresariado, los terratenientes y la clase política y 3) una estructura criminal organizada que persigue fines económicos propios” (2015, p. 146).

El anterior concepto encuentra respaldo en el informe “Basta Ya” del Centro de Memoria Histórica, que explica cómo el fenómeno paramilitar entrelazó el conflicto armado con el narcotráfico, a partir de tres sectores: las élites económicas, los narcotraficantes y los militares,

⁷ “Nuestra presencia en el campo del conflicto colombiano desnuda la ausencia del estado de autoridad, las falencias en las que hemos vivido durante tantos años y observemos estas imágenes ni en un terremoto todo con cilindros bomba, a ese enemigo nos tocó enfrentarnos cuando el estado dimitió de sus funciones, cuando las instituciones no asumían la responsabilidad que le correspondía.” (Diciembre 19 de 2006, primera versión libre de Salvatore Mancuso Gómez ante la Fiscalía Octava de Justicia y Paz, en la ciudad de Barranquilla.)

todos confluían inicialmente en un solo fin, defender sus propios intereses de los ataques de la guerrilla.

Es así como la transformación de autodefensas a paramilitares y la relación directa con el narcotráfico obedeció en principio a la necesidad de financiar a los grupos antisubversivos, como un medio, pero, posteriormente el narcotráfico se convirtió en el fin de lucha armada paramilitar al palpar las fructíferas ganancias de este negocio ilícito, pasando de largo por las incipiente y raquítica ideología que esbozaron, motivó su génesis. En una lectura del territorio colombiano respecto de la presencia de grupos de paramilitares entre 1994 y 2006, de acuerdo a datos obtenidos de El Espectador (2013) y la Fiscalía General de la Nación, señalan que el origen del Paramilitarismo se remonta al empoderamiento alcanzado en la década de los 90 por grupos de autodefensas que luego de confederados por los hermanos Carlos y José Vicente Castaño Gil y, Salvatore Mancuso Gómez, bajo la consigna de combatir a la guerrilla en cualquier tiempo y lugar, armada, desarmada, en combate o fuera de él, uniformada o de civil, y de ejercer oposición política y militar al aparato armado subversivo en las mismas condiciones de provocación y agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras, alienaron importantes sectores de la vida pública nacional, para pervertir sistemas de gobierno locales y entrar en una espiral de violencia que dejó como registro histórico dramáticas cifras de homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y otros crímenes cometidos por miembros vinculados a aquellas agrupaciones armadas ilegales.

4.2. Las huellas oscuras del paramilitarismo en Colombia

Con base en la amplia literatura que refiere el fenómeno paramilitar en Colombia, se hace una lectura rápida de los hechos que hicieron palpable y tristemente recordada la presencia paramilitar en el territorio colombiano, veamos:

En primer lugar, se destaca el origen del paramilitarismo, institucionalmente establecido por medio del Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 expedido por el gobierno del entonces presidente Guillermo León Valencia. En segundo lugar, se precisa el accionar de grupos guerrilleros de izquierda que empezaron a hacer presencia en lugares apartados donde el Estado colombiano no la ejercía, tales como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo), el ELN, el EPL, y el M-19. En el gobierno de Julio César Turbay (1978–1982) se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978. De otra parte, es importante tener en cuenta que en 1979, el cuarto frente de las FARC-EP, secuestró al padre de los "hermanos Castaño Gil" (Fidel, Vicente y Carlos) Jesús Castaño en Amalfi, Antioquia, torturado y asesinado pese a que sus hijos habían pagado la mitad del rescate exigido por los captores.

En este orden, en la década de los ochenta, existían grupos de autodefensas de origen estatal, que se convirtieron en grupos mal llamados “paramilitares”, apoyados y financiados por narcotraficantes y ganaderos, especialmente las autodefensas del Magdalena Medio comandadas por el legendario Ramón Isaza. A su vez, en 1981 nace el MAS o Muerte a Secuestradores; su origen responde al secuestro que el M-19 le causó a Martha Nieves Ochoa, hermana de los famosos narcotraficantes del cartel de Medellín “Los Ochoa Vásquez”; el MAS nació de las entrañas de los capos del narcotráfico antioqueño. Desde su nacimiento y hasta 1982, fecha de liberación de Nieves Ochoa, asesinaron a más de 200 personas.

Así pues, en 1982 surgen los paramilitares de Puerto Boyacá y se extienden hasta 1993, donde se da su declive por el asesinato de sus líderes. En 1983, con ocasión de la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca, Gonzalo Rodríguez Gacha empuña las banderas contrainsurgentes y apoya con recursos,

entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá, la nombrada “capital antisubversiva de Colombia”. Durante varios años, el “MAS” participó en el exterminio de la Unión Patriótica, considerado el brazo político de las FARC-EP; destacándose los casos de homicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990 y Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1987.

Para finales de 1987, Gonzalo Rodríguez Gacha, reconocido narcotraficante, contrató instructores extranjeros para preparar las estructuras paramilitares, cincuenta hombres seleccionados por Henry Pérez; otro tanto de alias El Mexicano; un puñado de Víctor Carranza y otro tanto de Pablo Escobar. Así el plan del Magdalena Medio se constituyó en el plan piloto que se imitó en gran parte de la geografía nacional, destinados a combatir a las guerrillas izquierdistas. A finales de la década de 1980, bajo el nombre de "Los Tangueros", surgieron en Urabá grupos liderados por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, que perpetraron en 1988 la masacre de Honduras y La Negra. Por otra parte, a principios de 1990 en Córdoba, se unió Salvatore Mancuso Gómez, quien las expandió por toda la Costa Atlántica (Atlántico, Magdalena, Guajira Cesar). En 1994, surgieron las convivir, Decreto Ley 356 de 1994, bajo la Presidencia de César Gaviria Trujillo. Posteriormente, en 1995, se reglamentan las convivir, el 27 de Abril de 1995 (En el periodo presidencial de Ernesto Samper), autorizadas más de 414, con más de 120.000 integrantes en todo país. Con posterioridad, se inició la consolidación de las Autodefensas y ya 18 de abril de 1997, se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), integradas inicialmente por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá “ACCU”, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales.

En este contexto, durante los años 1997 a 2003 se presentó un apogeo de las autodefensas, caracterizándose por relaciones con la clase política, económica y armada del país,

generando una expansión a lo largo del territorio nacional que culminó con la desmovilización masiva y escalonada de los grupos paramilitares (López, 2010).

La metamorfosis de las autodefensas inició con la existencia de los grupos armados que posteriormente se legalizaron a través de la creación de las convivir y que terminaron su transformación en paramilitares; la prueba más tangible de estos cambios la hallamos en las sentencias alternativas de postulados como Salvatore Mancuso, Raúl Hasblum, Hever Veloza García, alias HH, Armando Madariaga y Jesús Noraldo Bastos, quienes en diligencias individuales y diferentes, pero al unísono sobre el tema de las convivir confirmaron: “Pedro Juan Moreno, fue una de las personas que nos apoyó para la creación de las convivir y la legalización de los grupos ilegales a través de ésta figura (Mancuso, 2007); por su parte, el postulado Raúl Hasblum habló de la creación de 11 o 12 convivir en Urabá, entre esas *La Papagayo*, que recogía 3 centavos de dólar para apoyar las convivir con auspicio de Pedro Juan Moreno.

Entre las convivir más reconocidas encontramos: *Nuevo Amanecer* que operaba en la Finca Texas; las convivir *Asociación convivir amigos por Valencia* (esta organización constituyó los cimientos del Bloque Héroes de Tolobá); las convivir del Sur del Cesar fueron conocidas como *Renacer Cesarence*, *Santa Lucía* y *Los Arrayanes* (Unidad de Justicia y Paz, 2012); así mismo, encontramos las convivir Horizonte y Guaimaral, bajo la dirección de Salvatore Mancuso; la convivir *Avive*, a la cual pertenecía José Ignacio Roldan alias “Monoleche”; la convivir *Nuevo Amanecer*, de la cual era integrante Rodrigo Pelufo alias “Cadena” y Francisco Javier Piedrahita; la Convivir *Arrayanes*, del ex comandante Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”; la convivir *Deyavan*, de la que era miembro el ex comandante Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar” (Tribunal Superior de Bogotá, 2013); la convivir *Amigos por Valencia*, de Mario Prada, condenado por paramilitarismo: la convivir *Esperanza*, de Héctor Julio Alfonso

Pastrana, esposo de Enilce López, alias “La Gata” condenada por concierto para delinquir agravado y la convivir *Orden y Desarrollo*, de Salomón Feris Chadid, alias “08” del Bloque Norte de las Autodefensas y Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias “La Gata” (Tribunal Superior de Bogotá, 2013, pp. 288-289).

Ese cambio e interacción entre convivir y paramilitares, queda evidenciado y se ratifica en las sentencia alternativas de los Tribunales de Justicia y Paz y en las varias versiones de los comandantes paramilitares, Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate, Juan Francisco Prada Márquez, Raúl Hasblum, Hever Veloza García, alias HH, Armando Madariaga y Jesús Noraldo Bastos, queda claro que las Convivir facilitaron a los grupos paramilitares la dotación logística (armas, radios, uniformes, alimentos etc.), la recolección de dinero tanto los aportes voluntarios como los recaudos extorsivos; las operaciones de inteligencia; relaciones con fuerza pública, representantes del Estado de los niveles nacional, regional y local y que finalmente, concluyeron con el desarrollo de las actividades ilegales, de hechos como homicidios, desplazamientos, desapariciones y hurtos en el territorio nacional.

Curiosamente, en los documentos y versiones, se nombra una y otra vez a Pedro Juan Moreno como uno de los auspiciadores, gestores y promotores de las convivir y el paramilitarismo, personaje que está ligado a la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en tanto Moreno fue amigo personal, aliado político y secretario de gobierno en la gobernación de Uribe Vélez (1995-1997), razón por la cual, no es gratuito el eslogan que acredita a Pedro Juan Moreno como “el fiel escudero de Álvaro Uribe Vélez” y al expresidente Uribe como “máximo referente político de las Autodefensas Unidas de Colombia” (RCN Radio, 2020).

En Norte de Santander, los paramilitares al mando de Salvatore Mancuso Gómez, pintaron de sangre los campos y las ciudades en los barrios de clase media y baja, donde los

criminales encontraron el entorno perfecto para el reclutamiento de menores, desempleados y celadores que, por miedo, por necesidad o cuando no por obligación se enlistaron en el grupo armado; los ilegales apoyados por los miembros de las entidades de seguridad del Estado como la Policía, el DAS, el Ejército y la Fiscalía, quienes entregaban información en listas de muerte que ejecutaban los paramilitares. De la enclenque ideología que en algún tiempo lejano los inspiró –La lucha antisubversiva–, ya no quedaba ni la sombra; asesinaban por dinero como sicarios, por sospecha, por simples señalamientos sin fundamento; perpetraron delitos de género; ejercieron la extorsión e implantaron el terror y la desolación en los barrios de Cúcuta, convirtiendo calles, parques y canchas en cementerios y llegando incluso a construir hornos para volver cenizas los cuerpos de sus víctimas, sin consideración a las lágrimas de viudas, madres, esposas, padres e hijos que reclamaban por el paradero de sus familiares o rogaban por la entrega de sus cuerpos. Todo sucedió bajo la mirada de organizaciones tímidas y miedosas de las retaliaciones, pero, ante todo, bajo el amparo de un Estado, omisivo, pasivo, complaciente y cómplice.

Finalmente, para mediados de 2001, se reorganizó el autodenominado *Estado Mayor* de las AUC (Mancuso y los Castaño Gil) y en el año 2003, se dio inicio a los diálogos, precisamente ellos convencieron a los demás comandantes paramilitares para que se sentaran a negociar con el gobierno nacional, lo que arrojó como resultado, que el 15 de Junio de 2003, se firmara el denominado “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, que a la postre terminó con la desmovilización de los “paras” iniciada el 25 de Noviembre de 2003, en Medellín, con el bloque Cacique Nutibara y que terminó el 25 de Agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas, “en total 38 actos de desmovilización con un total de 30.150 ilegales” (El Tiempo, 2010); entre esas maquinarias

asesinas, el 10 de diciembre de 2004, en inmediaciones de Tibú, Norte de Santander, se desmovilizó el bloque Catatumbo.

Evidentemente, el genocidio paramilitar no terminó con la desmovilización masiva de los grupos paramilitares, en gracia de la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz, al contrario, constituyó un relevó, una renovación de las tropas, un cambio de mandos y una política sangrienta de sometimiento de las poblaciones a sangre y fuego con una nueva generación dispersa de paramilitares, de sicarios al servicio directo del narcotráfico y de las élites económicas, políticas del país, que esconden bajo su manto de lucha, fines perversos en contra de defensores de derechos humanos, de líderes y lideresas, de activistas, ambientalistas, defensores de tierras y jóvenes que se organizan para mejorar la sociedad y crear un mejor Estado, equitativo, social y responsable de las necesidades de los ciudadanos.

5. Capítulo II Historia de la extradición en Colombia

Es pertinente, antes de abordar el tema nacional, aproximarnos a la naturaleza semántica de la extradición. Así bien, en la *Cartilla de la Cancillería Colombiana*, se refiere a la extradición en su acepción más amplia, como: “un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad. Dicho concepto se concreta en la existencia de un acto formal y solemne por medio del cual un Estado ofrece, concede o solicita la entrega de un sindicado o condenado, nacional o extranjero, a otro Estado, por la presunta comisión de un delito en el territorio del Estado requirente” (Cancillería, 2014); por otra parte, en un concepto más común, es admisible considerar la extradición como la entrega de una persona refugiada o detenida en un país a las autoridades de otro que la reclama para juzgarla, evitando la impunidad.

En el mismo sentido, se encuentran varios conceptos de extradición; para el Ministerio de Justicia y del Derecho (s/f), la extradición es “un instrumento de cooperación judicial

internacional”. Por su parte, a Corte Constitucional de Colombia en Sentencia C-460 de 2008 ha conceptualizado que “la extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad” (Corte Constitucional, 2008).

Es claro que la extradición implica la remisión de un ciudadano a otro país, para ser juzgado allí, bajo las normas de ese Estado. En ese entendido, la aplicación de la extradición obedece necesariamente a tratados internacionales, así se desprende de la lectura del artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, en virtud del cual la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley. Además, el citado artículo añade que la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales por la legislación penal colombiana. Esta normatividad constitucional obedece al Acto Legislativo No. 1 de 1997, ya que el artículo 35 original del texto de 1991 prohibía expresamente la extradición de colombianos por nacimiento (sobre la discusión de la extradición en la Constituyente de 1991, véase Henao y Visbal, 2011). Ahora bien, desde 1997 existe una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, luego es un mecanismo que permite que la persona solicitada se juzgue y purgue la pena impuesta en el país solicitante, en virtud de evitar la impunidad y combatir el crimen; como se concluye en renglón anterior, no es necesario que el ciudadano solicitado este condenado, bien puede estar siendo procesado o investigado, de tal suerte que puede ejercer los derechos de defensa y del debido proceso, demostrando su inocencia o declarando su responsabilidad frente a los hechos que se le atribuyen. Concepto que apareja con lo manifestado por Manzini (1951) que considera que la extradición “en su aspecto más general, tiene carácter de derecho internacional” y es “un acto administrativo, de mutua asistencia represiva, internacional, mediante el cual nuestro Estado hace a un estado extranjero, previa intervención

de la garantía jurisdiccional, o recibe del mismo, la entrega de un imputado o de un condenado para los fines del procedimiento penal o de la ejecución de la condena” (pp. 182-183).

5.1. Las Clases de extradición y la extradición en Colombia

Del estudio de este mecanismo, se evidencian dos clases de extradición, que se caracterizan de acuerdo con el envío o recibo del ciudadano extraditado, si el país solicita la extradición se conoce como extradición activa, pero, si por el contrario, se recibe la solicitud de otro estado, se denomina extradición pasiva, así lo ratifica Gianzi al definir la extradición, como “un complejo de normas que disciplinan el acto a través del cual se concede o se ofrece a otro estado la entrega de un imputado o de un condenado para someterlo a un procedimiento penal” (1951, p. 685).

Resulta diáfano concluir que la finalidad de la extradición es permitir que la persona reclamada sea juzgada o cumpla la condena que le ha sido impuesta en el país que la requiere; todo con miras a combatir la criminalidad y evitar la impunidad y dentro de un contexto de cooperación mutua entre países.

Dada su naturaleza, de medio para el juzgamiento o cumplimiento de la pena, la extradición se determina como una figura de carácter procedimental, no sancionatoria, en cuanto no se hace juicio alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona requerida, como tampoco se le condena o impone una sanción penal; sin embargo en el trámite de la misma y cumpliendo con lo reglado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en el desarrollo del procedimiento se debe garantizar y observar el debido proceso y el derecho de defensa de la persona solicitada en extradición (Universidad de la Sabana, 2018).

De acuerdo con la información obtenida de medios periodísticos y radiales (RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo), así como de entidades gubernamentales (Ministerio de

Relaciones exteriores, Cancillería y Fiscalía General de la Nación), en nuestro país se presenta con mayor prevalencia la extradición pasiva, es decir, la solicitud de extradición que elevan otros estados a Colombia para el envío de ciudadanos y en especial, la mayor parte de las extradiciones según la cancillería colombiana se realiza con destino a los Estado Unidos por los delitos de narcotráfico, siendo precisamente esa conducta penal la generadora de más del 95% de las extradiciones en general a los distintos países del mundo.

Como vimos, la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 35 la figura de la extradición. En lo que respecta a los aspectos históricos relacionados con la extradición en Colombia, es pertinente partir del primer antecedente que nos traslada al 27 de octubre de 1888, cuando se firmó el tratado multilateral entre Gran Bretaña y Colombia, documento que señala textualmente: “para la prevención del crimen en los dos países y en sus jurisdicciones respectivas, que las personas acusadas o convictas de los delitos que en seguida se enumeran y que se hallen huyendo de la justicia, sean entregadas recíprocamente ...”, más adelante el art. 2º del tratado, cita: “La extradición se concederá recíprocamente para los siguientes delitos: ...” ; posteriormente se incorporó esta figura jurídica en el Código Penal colombiano –Ley 95 del 14 de Abril de 1936–, en los artículos 7 a 9 señalando en éste último: “La extradición se concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. A falta de tratados públicos, el Gobierno ofrecerá o concederá la extradición conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal (...). **No se concederá la extradición de colombianos** ni la de delincuentes político–sociales” (énfasis fuera del original).

De acuerdo con lo anteriormente reseñado, no estaba aprobada la extradición de nacionales o colombianos, fue sólo hasta la década de los ochenta con la Ley 27 de 1980, durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), con la firma del tratado de extradición con

los Estados Unidos de América, que la plenaria del congreso aprobó la extradición de connacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, cuyo precepto refiere: “Ninguna de las Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus propios nacionales, pero el poder ejecutivo del Estado requerido podrá entregarlos si lo considera conveniente.

Sin embargo, se concederá la extradición de nacionales, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado”. Posteriormente si bien, la literatura da cuenta de la existencia legislativa en el tema de extradición, iniciada en el referido gobierno de Julio César Turbay Ayala, por vicios de forma, fue derogada, como quiera que fue firmada por el ministro delegatario y no por el presidente; posteriormente la Ley 68 de 1986 subsanó la irregularidad, con la firma del presidente Virgilio Barco Vargas, pero, igualmente fue derogada, esta vez, por falta de trámite legislativo, en ese lapso de vigencia “temporal” de la norma, el 5 de Enero de 1985, “se extradita a los EEUU al primer colombiano, el empresario deportivo antioqueño, Hernando Botero Moreno por el delito de lavado de activos” (EL Espectador, 2016).

Luego de un vaivén de demandas y nuevos proyectos, posteriormente se presenta, en el año 1987, la extradición del segundo colombiano, Carlos Lehder, siendo el primer extraditado por el delito de narcotráfico; sucedido esto, y ante el temor de múltiples extradiciones se generó por parte de los carteles de la droga, un sinnúmero de atentados terrorista y asesinato de emblemáticos e ilustres personalidades del país, entre los que se destacan el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984, y el candidato presidencial Luis Carlos Galán, acallado el 18 de agosto de 1989, quienes propendían y avalaban la extradición de colombianos, presión ante la cual ceden las autoridades nacionales y unos años más tarde, los constituyentes de 1991 prohibieron la extradición de colombianos de nacimiento.

A finales de 1997, como resultado de las presiones del gobierno americano, se revivió la extradición, como vimos, en virtud del Acto Legislativo 01 de 1997, curiosamente bajo el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, a quien los EEUU le habían cancelado la visa; posteriormente, en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, en el año 1999, se concretó la siguiente extradición que activó el tratado y sirvió de plataforma a múltiples envíos de colombianos y que ha permitido hasta el mes de Abril de 2022, una cifra cercana a los 2.300 extraditados, de ellos, solo en el gobierno de Duque, 660, para promediar entre las cifras de los últimos cuatro (4) años, en 2018, 201; en 2019, 163; en 2020 135 y en 2021 166 , en los últimos 10 años, fueron enviados 1892 personas y Colombia recibió 99 (El Tiempo, 2021). Entre las extradiciones más recordadas están: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias Simón Trinidad (Miembro de las FARC) en diciembre de 2004; los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, narcotraficantes extraditados en diciembre del 2004 a USA; Camilo Torres Martínez, alias 'Fritanga, narcotraficante enviado en abril de 2013 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021); Alexander Farfán Pérez alias Gafas y Gerardo Aguilar, alias 'César' extraditados en julio de 2009 (Miembros de las FARC).

De acuerdo con lo observado, desde finales de la década de 1990, Colombia presentaba una política criminal de extradición permanente de ciudadanos a los EEUU, dentro de los compromisos bilaterales que los países adquieren como condiciones a los apoyos económicos, verbigracia, Estados Unidos con la denominada “certificación” (Acto unilateral del gobierno americano, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la seguridad nacional), política que fue continua durante varios años y dentro de la cual, se concretó la extradición de narcotraficantes, paramilitares, integrantes de las guerrillas de las FARC y ELN. En lo que respecta a los paramilitares desmovilizados, fueron enviados 14 de ellos, como lo registró el

periódico El Espectador (2020) "...Juan Carlos Sierra, alias "el Tuso", Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", Ramiro "Cuco" Vanoy, Hernán Giraldo, Nódier Giraldo, Guillermo Pérez Alzate, alias "Pablo Sevillano", Manuel Enrique Torregrosa, Diego Ruiz Arroyave, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias "el Flaco", Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias "Gordolindo" fueron extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008".

El Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004), en el libro V y siguientes, relacionó la cooperación internacional, como una forma de lucha contra el crimen; este libro comprende desde el artículo 484 hasta el artículo 508, en donde a partir del 490, se refiere exclusivamente a la extradición en lo que respecta a los trámites, requisitos, ofrecimiento, facultades, concepto de la Corte Suprema de Justicia, estudio del caso, derechos, recursos y la resolución que decide o niega la entrega del ciudadano.

La extradición como política de lucha contra la criminalidad transnacional y de cooperación recíproca entre gobiernos sufre un gran revés con los nuevos esquemas justicia, en particular con el advenimiento del Proceso de Paz con los paramilitares y finalmente con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz "JEP", por cuanto, si bien fueron extraditados a los EEUU catorce comandantes paramilitares, autorizada por el presidente Álvaro Uribe, esta decisión no fue bien recibida por las víctimas del conflicto armado, como tampoco por la organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch (Caracol Radio, 2008) y menos aún por los funcionarios adscritos a la Fiscalía de Justicia Transicional, Fiscales, investigadores, magistrados, defensores públicos y abogados consideraron la extradición como un golpe de mano al Proceso de Paz, generando una cuestionamiento y oposición al mecanismo de cooperación, lo cual se hizo papable en las versiones de Justicia y Paz y quedó demostrado con la

negativa de extradición, en 2018, de Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, Miembro del Secretariado de la Farc, por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2019), lo cual abrió la discusión sobre la aplicación de la extradición en vigencia de los procesos de justicia alternativa y que a la postre nos lleva a los albores del tema central de investigación.

6. Capítulo III El derecho a la justicia, entendida como verdad, reparación y no repetición, en el marco de la justicia transicional.

El Estado colombiano en su búsqueda de la paz nacional, ha adelantado numerosos procesos de desmovilización y reintegración a la vida civil de integrantes de los grupos armados ilegales, entre los que podemos relacionar a: El M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín (MPM); el Frente Francisco Garnica; las Autodefensas Unidas de Colombia “AUC” y en el año 2016, las FARC.

Para posibilitar estas desmovilizaciones, se creó una gama de normas que permiten la desmovilización, ofrecen garantías y medios para la reintegración a la vida civil y, ante todo, priorizan los derechos de las víctimas, bajo el estandarte esencial del derecho a la verdad, reparación, no repetición y justicia. Es pertinente acotar que pese a la aparente importancia de la necesidad de desmovilización de los ilegales armados, lo fundamental e importante de los procesos transicionales, son y deben ser *las víctimas*.

Las raíces de esta normativa de los derechos a la paz y los derechos de las víctimas en nuestro país las encontramos en la Constitución de 1991 y a partir de allí se da una seguidilla de normas direccionadas a la protección a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y al

Derecho Internacional Humanitario, proponiendo que ellas sean centro, el eje sobre el cual giran los procesos transicionales en búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Para destacar, las distintas normas establecieron un concepto de víctima (Ley 418 de 1997, Artículo 15), como “aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno...”.

A partir de esta normativa transicional, se construye un amparo, un enfoque de prevalencia a la protección de los derechos de las víctimas como principio intrínseco al Estado Social de Derecho, que promulga, “... el alineamiento de la Ley de Justicia y Paz hacia los derechos de las víctimas, ... la teoría de la justicia transicional, cuyo enfoque principal son las víctimas de las violaciones masivas de Derechos Humanos”, conforme textualmente lo relacionó, lo que indica un enfoque de prevalencia de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

Al respecto, refiere Rauschenbach Mina: “A través de los últimos años el involucramiento de la víctima en procesos penales se popularizó y se volvió más visible la influencia de fenómenos victimológicos en el derecho penal internacional” (p. 123); por su parte, respecto a los derechos de las víctimas, encontramos en el Estatuto de Roma una amplia gama de derechos y sus reglas de procedimiento y de prueba; de igual manera, aportaron significativamente a la universalización de los derechos de las víctimas, *Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of Humanitarian Law*, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Finalmente, y en un franco avance a los derechos de víctimas de crímenes particulares, la *UN International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, hace especial referencia “al derecho

a una reparación adecuada, efectiva y rápida de daños sufridos y el derecho a la verdad de las víctimas”.

Es así que con apoyo en los preceptos normativos, la jurisprudencia interna y externa y la doctrina, se han establecido en Colombia, ostensibles avances a la protección y garantía del derecho de las víctimas y la prevalencia de estos derechos humanos ante la existencia o confluencia de otros derechos que nos permite señalar un marco local y otro internacional de protección de los derechos de las víctimas.

6.1. Marco legal Internacional de protección a las víctimas

Es pertinente relacionar el marco normativo y jurisprudencial vigente a partir de lo que consideramos la base de la génesis de los derechos a las víctimas y que nos remonta a:

- La declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 40/34 expedida el 29 de noviembre de 1985, en donde se concluye que se entenderá por “víctima” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
- El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas de 1998 hace referencia múltiple en su articulado a las víctimas como sujetos de protección y derechos; entre otros apartes, encontramos expresa referencia a las víctimas en el preámbulo y los artículos 15, 19, 43, 53, 54, 58, 64, 68 y 75, manifestando en el Art. 75, numeral 1º. “La Corte establecerá principios aplicables a la

reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes...”

- La resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, en la cual se afirma el derecho de las víctimas a interponer recursos, y obtener reparaciones por las violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, lo cual surgió a partir de las directrices de la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, y del Consejo Económico y Social, en resolución 2005/30, de 25 de julio de 2005, en las que se recomendó a la Asamblea General la aprobación de estos principios, que a la postre se concretó con la resolución 60/147 de 2005. Estos Principios fueron adoptados de los Principios de Van Boven/Bassiouni y establecen, como ya se mencionó, los derechos de las víctimas a interponer recursos, a obtener reparación y las obligaciones de los Estados en prevenir violaciones, investigar, perseguir y sancionar a los perpetradores, brindar un acceso efectivo a la justicia a las víctimas, otorgar una reparación integral y evitar la repetición de dichas violaciones”.

- La Sexagésima primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones (2005), la cual se refirió a los Principios de Joinet/Orentlicher que preceptuaron la obligación de los Estados de investigar violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y llevar ante la justicia a los victimarios; en su texto se menciona: “La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las

personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

6.2. Marco normativo Interno

Pasando ahora al ámbito nacional, es necesario dirigirnos a la Constitución Política de Colombia de 1991, destacando que a partir incluso del preámbulo se estructuran los lineamientos de protección a las víctimas y de búsqueda de la paz, veamos:

- “EL PUEBLO DE COLOMBIA en ejercicio de su poder soberano, ... y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ...”.
- Artículo 1º constitucional, “Colombia es un Estado social de derecho, ... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad ...”.
- Artículo 93 de la Constitución, que refiere que los tratados de Derechos Humanos prevalecen en el orden interno.
- Artículo 229, de la misma Carta Política, que garantiza el acceso de toda persona a la administración de justicia.
- El artículo 250 Constitución Política de Colombia, que incorpora el Acto legislativo N° 03 de 2002, el cual señala: ... 1. En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y “la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.” ... 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los

testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” (subrayado fuera del original).

Posteriormente, tomando un orden cronológico, encontramos que se adoptan en nuestro país, normas que giran en su esencia por la protección de los derechos de las víctimas, son estas:

- **Ley 104 de 1993**

Son los primeros balbuceos del concepto de víctima y la ratificación de sus derechos, se empieza a percibir a partir del artículo 18 de la referida Ley: de esta norma que establece “... se entiende por víctimas aquellas personas que sufren directamente perjuicios por razón de los atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos y las tomas guerrilleras que afecten en forma indiscriminada a la población”, en su articulado, encontramos treinta y un veces la palabra *víctima*, relacionada en veintitrés de los ciento treinta y cinco artículos, que contemplan en términos generales atención médica, atención hospitalaria, asistencia en materia de créditos, asistencia educativa, exención de impuestos, pensión por incapacidad y programas de protección a testigos. Esta norma tuvo una vigencia parcial de dos años (artículo 134).

Se observa que se queda corto en el concepto de víctima, que lo limita a atentados y tomas guerrilleras y nada dice sobre sus derechos, sobre los daños causados; del procedimiento; de las autoridades ante quien reclamarlos, como tampoco habla de los victimarios de las obligaciones y de la reparación y principalmente, no considera la existencia de un conflicto armado. En cuanto a los victimarios extraditados, no se hace ningún pronunciamiento.

- **Ley 418 de 1997**

Esta ley comporta una gama más amplia de derechos de las víctimas, generados a partir de un concepto un poco más amplio de víctima, registrado desde el título II, artículo 15 como:

“... aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.”. la ley cuenta con 132 artículos a lo largo de los cuales se registra treinta y tres veces -33- veces la palabra víctima en veintiséis ocasiones, siendo relevante que desde acá se consideran víctimas del conflicto armado interno y se les ofrece asistencia económica, en salud, vivienda, créditos, descuentos en obligaciones de créditos agrarios, garantía financiera para créditos, apoyo y capacitación técnica, económica y administrativa; exención de impuestos; pensión por incapacidad y ayuda fúnebres y la creación de un rubro anual específico del presupuesto general de la nación, para la atención de las víctimas. Esta norma, conforme al artículo 131, presentó una vigencia parcial de 2 años y en su contenido no regula el tema de los victimarios extraditados.

- **Ley 975 de 2005**

Conocida como *Ley de Justicia y Paz*, partir del artículo 1º señala la preponderancia de las víctimas, al referir: “garantizando los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Como se observa, la citada ley denota una esencial importancia de los derechos de las víctimas, lo cual se ratifica a lo largo del articulado, por cuanto posteriormente, lo señala en los artículos 3, 4 y principalmente en el 5º, se presenta la definición de víctima: “Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.”, concepto que es idéntico al regulado en el Art. 3º de la Ley 1448 de 2011; adicionalmente esta ley 975 continúa

protegiendo, señalando, regulando y garantizando los derechos de las víctimas del conflicto armado a la justicia, verdad, reparación y no repetición, de tal suerte que se nombra en los artículos posteriores: 6°, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 39 y desde el artículo 42 al artículo 55, en el capítulo IX denominado “Derecho a la reparación de las víctimas” , y finalmente, encontramos referencia a las víctimas en los artículos 58 y 70 de esta ley, es decir, noventa veces se repite la palabra *víctima*, en una norma que contiene setenta y dos artículos, siendo relacionada la víctima en 35 de los 72 artículos. Es de resaltar el artículo 4° ibidem que señala el derecho que tienen las víctimas a “... la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso...” que de forma individual ratifican los artículos 6° (Derecho a la justicia), 7° (Derecho a la verdad) y 8° (Derecho a la reparación).

De otra parte, es necesario mencionar la ley 1592 de 2012 y el Decreto 3011 de 2013; normas que reglamentaron, adicionaron y modificaron ley 975 de 2005 y que contemplaron en su articulado, pronunciamientos respecto de la participación de los extraditados postulados en la construcción de los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas, así: la ley 1592 de 2012, estableció el artículo 46A referido a los postulados extraditados en donde “...el Estado debe procurar la adopción de medidas conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno”.

Así mismo, el Decreto 3011 de 2013 señaló la cooperación con autoridades de otros países para garantizar la participación de los postulados extraditados, al expresar: “El Ministerio de Justicia y del Derecho será la entidad encargada de coordinar con todas las entidades del Estado las gestiones pertinentes que se deban llevar a cabo con las autoridades judiciales

extranjeras para facilitar la participación de postulados extraditados en cualquier proceso de justicia transicional.”.

Se debe rescatar de la ley, los cimientos del reconocimiento de los derechos de las víctimas, su participación activa en el proceso transicional, en el entendido de la posibilidad de interrogar informalmente a los victimarios, para preguntar por los hechos, los móviles, los autores, las características de tiempo y lugar como se perpetró el hecho victimizante y las solicitudes de perdón directo; así mismo, estableció un procedimiento en la participación de las víctimas que inicia desde la versión primaria rendida por el postulado ante la fiscalía de justicia y paz, luego, puede participar en la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento –ante el magistrado de control de garantías–, posteriormente, en la audiencia concentrada de legalización y formulación de cargos ante el magistrado de conocimiento, y finalmente en el incidente de reparación en este último despacho, previo a dictar sentencia, lo que indica que en el trámite transicional regulado por esta norma y las norma reglamentarias, las víctimas tienen su espacio, son escuchadas y cuentan con voz en todas y cada una de las etapas del proceso de justicia y paz directamente o a través de apoderado.

Los críticos rescatan como benéfico del proceso: 1º La desmovilización de 35.353 personas, entre paramilitares y guerrilleros; 2º El cumplimiento de penas físicas por los victimarios; 3º La reparación por los daños causados a las víctimas y ambigualmente le critican: 1º Haber constituido blindaje para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad; 2º. La reducida efectividad en términos de sentencias y hechos procesados; 3º Se percibe que se trata al postulado, por parte de los funcionarios públicos –Inpec, Fiscales, Policías, Magistrados, Procuradores, Defensores–, como señores, personas poderosas y respetables y no como delincuentes desmovilizados. 4º La demora en los trámites del procedimiento, no obstante, se ha

reformado unificando audiencias, por ejemplo, se unió la imputación de cargos con la de medida de aseguramiento y la formulación de cargos con la legalización. Es una jurisdicción que cuenta con más de 15 años de existencia, término en que registra, según la Fiscalía de justicia transicional, de la Fiscalía General de la Nación, 238.019 hechos cometidos por el paramilitarismo; con 70 sentencias dictadas en contra de 588 paramilitares, dejando como conclusión que el trámite de justicia y paz se quedó corto y que la multiplicidad de multitud de víctimas y de hechos, desbordó las expectativas que generó esta jurisdicción (El Tiempo, 2020).

Ahora bien, en términos procesales, la ley 975 de 2005 diseñó un trámite adjetivo especial que permitió que, a los desmovilizados, previa postulación por parte del Gobierno Nacional y una vez satisfechos los requisitos de elegibilidad, se les impusiera una sanción sustancialmente más reducida respecto de la pena ordinaria determinada con base en las disposiciones de la Ley 599 de 2000 o Código Penal. Así las cosas, se precisa que, en la sentencia condenatoria producto de los procesos penales de Justicia y Paz, se ha de imponer una pena ordinaria conforme a la ley penal general vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, cuya ejecución se *suspende* y en su lugar se impone y ejecuta una pena alternativa, la cual se determina en la misma sentencia (Aponte, 2011, p. 44). En esto consiste la llamada *alternatividad*, consagrada en el artículo 3 de la ley 975 de 2005:

Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la

reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley⁸.

En efecto, el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 incorporó la definición de la pena alternativa; así las cosas, la Sala competente del Tribunal Superior del Distrito Judicial, debe determinar en la sentencia la pena correspondiente por las conductas punibles cometidas, de conformidad con la normatividad del Código Penal, e imponer, asimismo, una pena alternativa privativa de la libertad por un periodo que debe oscilar entre cinco y ocho años, cuya tasación se realiza con base en la gravedad de los delitos y la colaboración del procesado encaminada a satisfacer los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad y a la reparación. A este respecto, refiere Aponte (2011, p. 44):

En la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de junio de 2010, el desmovilizado Edwar Cobos Téllez fue condenado a la pena principal de 468 meses de prisión y a una pena alternativa de ocho años; de la misma manera, en dicha sentencia el desmovilizado Uber Enrique Bánquez Martínez, fue condenado a 462 meses de prisión como pena principal y a ocho años de prisión como pena alternativa. En los dos casos la pena principal fue suspendida y se ordenó el cumplimiento de la pena alternativa”.

⁸Frente a esta institución, la Comisión Internacional de Juristas, como interviniente en la sentencia C-370 de 2006 manifestó: “Esta figura de la “pena alternativa” no solamente contradice el principio de la proporcionalidad de las penas sino que es contrario a la obligación internacional del Estado de sancionar las graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra con penas apropiadas a la gravedad de estos delitos. La imposición de sanciones irrisorias, en desprecio del principio de proporcionalidad de las penas, constituye una forma reconocida de impunidad bajo el Derecho Internacional”.

El mismo autor refiere que el concepto de alternatividad penal es una institución creada con la Ley de Justicia y Paz y su diferencia con la ley 782 de 2002:

La alternatividad es, entonces, un concepto que surge con la Ley de Justicia y Paz. De hecho, el beneficio jurídico punitivo establecido en la Ley 975 de 2005 a favor de los miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley es, precisamente, la posibilidad de acceder a una pena alternativa. Esta es una diferencia fundamental entre la Ley 975 de 2005 y la Ley 782 de 2002, pues en la primera sí se declara la responsabilidad penal de los desmovilizados y se impone una sanción penal, mientras que en la segunda los beneficios apuntan a eximir de responsabilidad penal a quienes se someten a ella. Como se ha señalado, esto se explica en función del tipo de conductas que dan lugar a la alternatividad o, por ejemplo, al indulto (Aponte, 2011, p. 45).

El artículo 29 de la ley 975 de 2005 establece que para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Cuando la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se han cumplido, se debe conceder al condenado un periodo de libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta. Cumplidas las condiciones ordenadas por la Sala de Conocimiento y transcurrido el periodo de prueba, se debe declarar extinguida la pena principal. De lo contrario, se revoca la pena alternativa y se tendrá que cumplir la pena principal. A este respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 concluyó lo siguiente:

Esta configuración de la denominada pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena (Corte Constitucional, 2006).

En cuanto a la acumulación de procesos y de penas, aspecto ligado íntimamente con la *alternatividad*, el artículo 20 de la ley 975 de 2005 contempla dos eventualidades, a saber: 1. Cuando existan procesos penales en curso contra el desmovilizado-postulado a Justicia y Paz por hechos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley; en este caso la norma consagra que los procesos penales en curso se acumulen al proceso penal especial adelantado bajo la normativa de la ley 975 de 2005; y 2. Se refiere a los casos en que existen sentencias condenatorias contra los postulados, naturalmente con ocasión de su pertenencia al grupo ilegal armado. En este caso, cuando el desmovilizado-postulado haya sido condenado con anterioridad por la justicia penal ordinaria, respecto de hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal, la sanción que se le hubiere impuesto se acumulará con la pena ordinaria imponible en Justicia y Paz, para posteriormente determinar la pena alternativa (Aponte, 2011, p. 48). Al analizar esta institución, la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006 precisó:

De tal forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo

armado organizado al margen de la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la pena alternativa”.

En lo concerniente al proceso de desmovilización, el artículo 9 de la ley 975 de 2005 establece que “se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley realizado ante la autoridad competente”; así mismo, el inciso segundo de este artículo precisa que el proceso de desmovilización se realizará de conformidad con lo establecido en la ley 782 de 2002.

En efecto, la ley 782 de 2002 estipula un marco normativo que permite al Gobierno Nacional adelantar procesos de paz con los grupos armados al margen de la ley, para lo cual modificó los artículos 8⁹, 10 y 12 de la ley 418 de 1997 (modificada por las leyes 1421 de 2010 y 1779 de 2016) y derogó el artículo 11 ibidem. Estas modificaciones permiten que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional realicen actos relativos a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con grupos armados organizados al margen de la ley. Así mismo, faculta a dichos representantes para que firmen acuerdos con los voceros de los grupos ilegales, dirigidos a “obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos,

⁹ Modificado por el artículo 1 de la ley 1779 de 2016.

o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”, al tenor del artículo 8, ley 418 de 1997, modificado por el artículo 1 de la ley 1779 de 2016.

De igual manera, se autoriza al Jefe de Estado para que determine la localización y formas de accionar de la fuerza pública, a efectos de facilitar el diálogo, y a la postre lo faculta para establecer un lugar nacional o internacional propicio para adelantar los diálogos de paz. Para tal fin, el parágrafo 2° del artículo 3 de la ley 782 de 2002 establece que una vez iniciados los diálogos de paz y con el fin de facilitar su desarrollo, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado en contra de los miembros de los grupos armados ilegales previa notificación del Gobierno Nacional; y en aras de propiciar la confianza en los eventuales procesos de paz que pudiere adelantar el Gobierno con los nombrados grupos armados, la ley consagra que se garantizará la seguridad de quienes decidan establecer diálogos de paz mientras dure el proceso, así como la garantía de su no judicialización hasta tanto no terminen los diálogos.

El parágrafo 1° del artículo 3 de la ley 782 de 2002 precisa el concepto de *grupo armado al margen de la ley*, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario: “Parágrafo 1°. De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.

Ahora bien, en cuanto a la acreditación como miembro de la organización ilegal, el artículo 21 de la ley 782 de 2002, que modificó el artículo 53 de la ley 418 de 1997, establece que dicha condición se comprobará por reconocimiento expreso de los voceros o representantes

del grupo armado al margen de la ley, así mismo, se podrá acreditar presentando pruebas por parte del solicitante o mediante la información de que dispongan las instituciones estatales¹⁰. El párrafo del artículo 21 de la ley 782 de 2002¹¹ establece que cuando se trate de personas que hubieren abandonado el grupo armado ilegal *voluntariamente* y se presenten ante las autoridades (civiles, militares o judiciales) la autoridad competente deberá enviar de oficio, dentro de los tres días siguientes más el término de la distancia, toda la documentación pertinente al Comité Operativo para la Dejación de Armas, creado por el decreto 1385 de 1994¹², el cual expedirá una certificación que contenga el nombre de la persona que a su juicio pueda solicitar los beneficios señalados, conforme al artículo 1 del mencionado decreto. La decisión tomada por el Comité se

¹⁰ Norma vigente: artículo 12 de la ley 1421 de 2010, el cual modificó el artículo 53 de la ley 418 de 1997.

¹¹ El artículo 12 de la ley 1421 de 2010 adiciona al párrafo del artículo 53 el siguiente párrafo: La decisión tomada por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, deberá ser enviada, además, a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social, Económica de Personas y Grupos Armados Organizados al Margen de la ley, a la autoridad judicial competente, quien, con fundamento en ella, decidirá lo pertinente respecto a los beneficios a que hace referencia del presente título.

¹² Decreto 1385 de 1994: “Artículo 5o. Habrá un Comité Operativo para la Dejación de las Armas que deberá realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a los beneficios de que trata este Decreto, diseñar los programas de inserción socioeconómica y otorgar o negar los beneficios económicos y sociales a quienes lo soliciten. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité Operativo podrá solicitar a los organismos de seguridad del Estado y demás instituciones competentes, la información y pruebas que posean sobre la persona que desea reincorporarse a la vida civil.

El Comité Operativo para la Dejación de las Armas estará integrado por los siguientes miembros (en concordancia con el artículo 11 de Decreto 128 de 2003):

1. Un delegado del Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá.
2. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional, a cargo del cual estará la secretaría técnica.
3. Un funcionario del programa de reincorporación del Ministerio del Interior. **Expresión subrayada sustituida por la expresión "Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas", mediante el art.9, Decreto Nacional 1391 de 2011**
4. Un delegado del Fiscal General de la Nación.
5. Un delegado del Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
6. Un delegado del Defensor del Pueblo.

envía inmediatamente al Gobierno Nacional y a la autoridad judicial competente, quien con base en ella decidirá a qué beneficios podrá acceder el postulado.

En cuanto al indulto, el artículo 23 de la ley 732 de 2002, modificatorio del artículo 57 de la ley 418 de 1997¹³, consagra que dicho beneficio debe ser solicitado por el interesado, quien lo puede hacer directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio del Interior y contendrá también la ubicación donde se encuentre el expediente o la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal, quien en forma inmediata dará traslado de la petición al Ministerio para los fines indicados. La solicitud contendrá, además de la petición del beneficio, la manifestación expresa y directa de la voluntad de reintegración a la vida civil, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento (ley 418 de 1997 artículo 57).

Por otra parte, una vez realizada la desmovilización (individual o colectiva) de acuerdo con lo establecido en la ley 782 de 2002 y demás normas complementarias, para acceder a la indulgencia punitiva contenida en la Ley 975 de 2005 se precisa que los desmovilizados sean postulados por el Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia y del Derecho) ante la Fiscalía General de la Nación.

En un principio, este procedimiento lo regulaba el Decreto 4760 de 2005, según el cual las listas de postulados para acceder al procedimiento penal especial consagrado en la ley de Justicia y Paz, que deben ser elaboradas por el Gobierno Nacional, se podrán integrar con los nombres de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado de manera colectiva de acuerdo con la Ley 782 de 2002. En estos casos, el representante del

¹³ Modificado a su vez por el artículo 14 de la ley 1421 de 2010: “También contendrá la indicación del despacho judicial donde se encuentra el expediente, si fuere conocido por el interesado”.

grupo desmovilizado debía informar por escrito al Alto Comisionado para la Paz, sobre los miembros que se encuentren privados de la libertad.

Adicionalmente, la ley autorizó al Gobierno para que incluyera en las listas, de la misma manera, a quienes se hayan desmovilizado voluntariamente y de manera individual, según la Ley 782 de 2002. Para esto se exigió que el desmovilizado contribuyera a la consecución de la paz nacional, que haya entregado información o colaborado para el desmantelamiento del grupo al que pertenecía y que hubiera suscrito un acta de compromiso con el gobierno nacional. En todo caso, será necesario que los desmovilizados hayan manifestado, previamente y por escrito ante el Alto Comisionado para la Paz o al Ministro de Defensa, según se trate de desmovilizados colectiva o individualmente, su voluntad de ser postulados para acogerse al procedimiento y beneficios de la Ley 975 de 2005 (Aponte, 2011, p. 23).

El anteriormente mencionado Decreto 4760 de 2005 fue derogado por el artículo 99 del Decreto 3011 de 2013, el cual introdujo algunos cambios relativos a la fecha de desmovilización y los límites temporales de postulación. De igual manera estableció que cuando un postulado haya pertenecido con anterioridad a su desmovilización a más de un grupo armado organizado al margen de la ley, bastará con una sola postulación por su pertenencia a uno de estos, para que contribuya al esclarecimiento de los hechos relacionados con su pertenencia a todos¹⁴.

En lo que respecta a la elegibilidad, los artículos 10 y 11 de la ley 975 de 2005 establecen los *requisitos de elegibilidad*, en virtud de los cuales el desmovilizado podrá acceder a la indulgencia punitiva incorporada en la mencionada ley. En efecto, el artículo 10 ídem establece que podrán acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Justicia y Paz los miembros de un grupo organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o

¹⁴ Decreto 3011 de 2013. Artículo 13.

condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones¹⁵:

En primer término, es preciso que el grupo se haya desmovilizado en virtud de un acuerdo con el Gobierno Nacional. Así mismo, los miembros de dicho grupo deben entregar los bienes producto de la actividad ilegal. Frente a la discusión de si los desmovilizados debían entregar todo su patrimonio, lícito e ilícito, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia C-370 de 2006 precisó lo siguiente:

Los requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente demandados, son requisitos ‘para acceder a los beneficios que establece la presente ley’, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien – o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito

¹⁵ Ley 975 de 2005 artículo 10.

de elegibilidad, tanto para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por estas razones la Corte no encuentra inexecutable las expresiones ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se declarará en la parte resolutive de esta providencia (Corte Constitucional, 2006).

En segundo término, deben dar información sobre las personas desaparecidas. Además, en lo relativo a los menores de edad reclutados, éstos deben ser puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se precisa también que el grupo debe cesar todo tipo de actividad ilícita; y, por último, establece que el grupo de que se trate no haya sido formado para el tráfico de estupefacientes y el enriquecimiento ilícito y que libere a las personas secuestradas que se encuentren en su poder. A este respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-307 de 2006 precisó:

Resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios penales a personas que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que exija, como condición para el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del delito hubieren indicado, desde el momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de las personas desaparecidas. En efecto, tal y como se señaló en el caso anterior, el Estado no puede renunciar a utilizar todos los mecanismos a su alcance para prevenir delitos de suma gravedad y, en el caso en el cual se hubieren cometido, para interrumpir sus efectos sobre la víctima o sobre sus familiares. En este sentido es importante reconocer que la obligación de liberar a las personas

secuestradas es de naturaleza similar a la obligación constitucional de revelar el destino de las personas desaparecidas. Sin embargo, no parece existir ninguna razón por la cual el legislador hubiere omitido establecer como requisito de elegibilidad revelar el destino de las personas desaparecidas mientras consagró como condición para acceder a los beneficios de la ley liberar a las personas secuestradas, en el evento de la desmovilización colectiva (Corte Constitucional, 2006).

En cuanto a la desmovilización *individual*, el artículo 11 de la Ley 975 de 2005 consagra que cuando los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley se hayan desmovilizado de forma individual “y contribuyan a la consecución de la paz nacional” tendrán derecho a los beneficios punitivos de la misma siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

El primero, que entregue información o coadyuve al desmantelamiento de la organización criminal a la cual pertenecía; el segundo, precisó que el desmovilizado debía haber suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional. Así mismo, estableció en el tercero, que el excombatiente se haya desmovilizado y haya abandonado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional. En el cuarto, el desmovilizado debería cesar toda actividad ilícita y entregar todos los bienes producto de la actividad ilegal con el fin de reparar a las víctimas; y por último, se precisa que la actividad del desmovilizado no se haya desplegado en ejercicio del tráfico de estupefacientes ni el enriquecimiento ilícito. Los Decretos 4760 de 2005, 3391 de 2006, 423 de 2007 y 4874 de 2008 reglamentaron someramente los requisitos de elegibilidad

consagrados en los artículos 10 y 11 de la ley 975 de 2005. Estas disposiciones fueron derogadas por el artículo 99 del Decreto 3011 de 2013¹⁶.

- **Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras**

El contenido de esta norma presenta numerosas disposiciones normativas que consagran expresiones, derechos y garantías en favor de las víctimas, refiriendo desde el principio que la norma establece un “conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas” (Artículo 1°); en idéntica forma de la Ley 975 de 2005 e incluso en el mismo artículo 3° consagra el concepto de víctima, pero, en esta norma va más allá en tres aspectos:

En primer lugar, relaciona quiénes son víctimas, es decir, unos órdenes de las víctimas, señalando que lo son: “el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente”.

En segundo lugar, estipula una gama adicional de las víctimas, toda vez que refiere que también se considera víctimas a “las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”, resaltando que esa condición de víctima se adquiere “... con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al

¹⁶ Decreto 3011 de 2013: “**Artículo 14. Requisitos.** La verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado, dentro del ámbito de sus funciones. En todo caso, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial es la instancia competente para evaluar si procede la aplicación de la pena alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005”.

autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”, esto último, en concordancia con lo expresado por la Corte Constitucional, en Sentencia T-092 de 2019.

En tercer término, establece un límite de temporalidad para que las víctimas reclamen, así: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

En este orden de ideas, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras visualiza un concepto mucho más amplio y completo de víctima y su ámbito de protección, textualmente manifiesta el artículo primero que su objeto es “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones”; contempla quinientas ochenta y ocho veces la palabra víctima en ciento cuarenta y cinco de los 208 artículos que contiene, luego considera de manera para visible el tema; adicional, encontramos en su contenido apartes relevantes como las medidas de asistencia a las víctimas en salud, educación, gastos fúnebres, fija una reparación por los daños causados y un fondo de reparación; consagra la reparación colectiva; refiere el registro de las víctimas y principalmente reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición (artículo 9), adicional, señala la reparación de los daños en cabeza del victimario y subsidiariamente del Estado; la norma tiene una vigencia hasta el 31 de Junio de 2031 y en ella se dedica el artículo 195 a los extraditados, consagrando la garantía de participación de las víctimas en los proceso que vincule a los integrantes de grupos armados o desmovilizados extraditados, condenados por

delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, adoptando medidas de colaboración entre los estados que permitan la participación efectiva del victimario.

- **El Acto legislativo 01 de 2017**

Los Actos Legislativos 1° y 2° de 2017 constituyen las bases, la piedra angular que regula la terminación del conflicto armado existente en entre las FARC E.P. y el Estado colombiano; es así que por medio del Acto Legislativo 1° de 2017 se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la paz; el documento que guarda mínimas similitudes con ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz, en lo fundamental corrige falencias; adiciona otros temas y principalmente otorga a las víctimas suprema relevancia, señalándolas como el eje central del proceso transicional, de tal forma que prioriza la participación y representación de ellas. La norma crea la Jurisdicción Especial para la Paz o “JEP” como un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), dentro de un modelo de justicia restaurativa, en donde se da mayor prevalencia a la reconstrucción de la verdad y la reparación de los daños causados y una menor importancia al castigo de los victimarios; siendo éste uno de los temas más criticados de la “JEP” al considerar que favorece la impunidad y revictimiza, por cuanto no priva de la libertad a los victimarios.

Adicional a los dos actos legislativos, comprende las siguientes normas: La ley 1820 de 2016 - disposiciones sobre Amnistía o Indulto; tratamientos especiales y otras disposiciones - y la ley 1922 de 2018 reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz" y la ley 1957 de 2019, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es oportuno señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz, cuenta con una vigencia de veinte años y que investiga y juzga los delitos cometidos dentro del marco del conflicto armado,

hasta diciembre de 2016, por responsabilidad excombatientes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.

La JEP reconoce a las víctimas como ciudadanos con derechos, por ejemplo, derecho a la verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto armado, reconocimiento de responsabilidad por parte de autores; derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; siendo éste el principal objetivo de la JEP, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera.

Ahora bien, por otra parte, en relación con la extradición se dedica un capítulo completo, el quinto, que señala:

Extradición. Artículo transitorio 19. Sobre la extradición. No se podrán conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátense de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia .

La implementación de la JEP constituye un avance al tratamiento de las víctimas, el reconocimiento de sus derechos, pero, en el tiempo que lleva operando se crítica de demora en la judicialización; ya se mencionó y se ratifica, se señala de promover la impunidad, catalogándola como fachada de justicia y un tribunal de las Farc.

Para entender mejor a la JEP se debe tener en cuenta que es una jurisdicción, en cuyo componente de justicia contiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), su función básica es administrar justicia transicional a los autores, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, de los delitos cometidos durante el conflicto armado, es decir, antes del 1º de diciembre de 2016; si bien se ha estigmatizado a la JEP como “una fachada de justicia” que beneficia desproporcionadamente a los y las integrantes de las FARC-EP; que se ha convertido este mecanismo de justicia transicional en un “tribunal de las FARC” y una jurisdicción especial que permite, facilita, genera o, incluso, incrementa la impunidad por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado (Ambos, 2020). Lo anterior no es correcto; se ha desdibujado su objetivo y desconocido los pilares de su creación; es pertinente manifestar que la Jurisdicción Especial para la Paz se creó dentro del marco de un proceso de paz con las Farc, donde se pactó una justicia restaurativa que no implica necesariamente la privación de la libertad de quienes se sometan al proceso; justicia restaurativa que, operando en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Ahora, muchos de los ciudadanos colombianos han asociado el término justicia con cárcel o con privación de la libertad que se asemeja más al concepto de justicia procesal, desconociendo que existen varias clases de justicia, a saber: *Justicia distributiva o económica, Justicia procesal, Justicia retributiva, Justicia restaurativa.*

Si partimos del previo conocimiento del concepto de la justicia restaurativa y esta a su vez, como un ingrediente básico de la JEP en donde se menciona textualmente: “El Sistema Integral hará especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, ... Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto,

especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización” (Acto legislativo 01 de 2017, artículo 1º), solo así, entenderíamos mejor que lo que se pactó con las Farc no fue un proceso de paz, para aceptar penas privativas de la libertad o mejor, para ser trasladados a una cárcel; se acordó la aplicación de medidas o penas restaurativas y así significa, no privativas de la libertad con el fin de restaurar, restituir, reparar el daño causado en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición y como el fin ulterior de bienestar, tranquilidad, sanar las heridas y lograr un balance en las relaciones en la comunidad. Luego se debe exigir bajo esos términos el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las anteriores disposiciones normativas constituyen el marco general que hace referencia a las víctimas y los derechos, concretados todos a justicia, verdad, reparación y no repetición dentro del conflicto armado en Colombia que perduró por más de cincuenta años y que dejó miles de víctimas; conflicto que no ha terminado, pese a los ingentes esfuerzos de varios gobiernos que han desmovilizado grupos armados ilegales como el M-19; el EPL, los paramilitares y las Farc E.P.

7. Capítulo IV. Estudio de caso. La afectación a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del proceso de Justicia y Paz con la extradición del Salvatore Mancuso Gómez

Con el objeto de buscar respuesta a la pregunta problema, se han observado y analizado las normativas internas y externas que promulgan la búsqueda de dos principios fundamentales, uno el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en contraposición con la extradición, como un mecanismo judicial de colaboración internacional de lucha contra la impunidad.

7.1. De las víctimas

En cuanto al primero de ellos, el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición el capítulo III abordaron de manera detallada las normas que propenden por el reconocimiento y derecho de las víctimas, a partir de un concepto de Derecho Internacional acogido por la legislación colombiana, pero que ha sido objeto de cambios y modificaciones que históricamente y a través de distintas normas, se ha decantado para llegar hoy a conocer el concepto más completo de víctima:

La persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño por los hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” ; “También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima” (artículo 3º, Ley 1448 de 2011).

Más que un concepto es una gama de derechos y garantías a las víctimas del conflicto armado que debe indudablemente marcar un derrotero de preferencia ante otros

compromisos del Estado colombiano; por ejemplo, con los convenios internacionales de extradición, que si bien es cierto, es un mecanismo ideal para la lucha en contra de la impunidad, del crimen organizado y contra las delincuencia transnacional, en tanto no permite que los delincuentes busquen refugio en otros países, no menos cierto es que su aplicación, es decir, la extradición de los ciudadanos, ha generado en Colombia, inconformidades relacionadas con la reparación, la reconstrucción de la verdad y el concepto de justicia nacional.

7.2. De la Extradición

Es importante saber que “la oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno, pero, requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia” (Universidad EAFIT, 2020); luego, para concretar la extradición de un ciudadano colombiano, se ha establecido un procedimiento especial y el cumplimiento de un paso a paso que termina con el envío del ciudadano al país requirente. Veamos lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte, Sala de Casación Penal, que refiere “cinco requisitos en el trámite de extradición, a saber: 1º La validez formal de la documentación, que debe contener la plena identidad del extraditable; 2º El concepto de la Corte debe contener la plenamente la identidad del solicitado; 3º Señalar la equivalencia de la sentencia extranjera; 4º Establecer que no se viola la garantía de prohibición de doble incriminación y, 5º Pronunciarse si resulta o no aplicable para el asunto sometido a estudio”.

Cuando la decisión de la Corte es negativa, el concepto tiene efectos vinculantes para el Gobierno Nacional, es decir, de obligatorio cumplimiento, al tenor del artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con la Sentencia C-548 de 1997. Si el concepto es favorable, el Ejecutivo puede actuar de acuerdo con las conveniencias nacionales, lo que indica que puede autorizar la extradición, condicionarla, suspenderla o abstenerse de concederla

(artículos 493 y 494 Código de Procedimiento Penal), esta decisión es comunicada mediante una resolución que tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo (artículo 495, numeral 4, Ley 906 de 2004), decisión contra la cual procede el medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, por ser una decisión eminentemente administrativa.

Es importante conocer que la extradición, a pesar de haber sido concedida por la Corte Suprema de Justicia, bien puede ser negada por el ejecutivo, dentro de esa justificación señalada como razones de conveniencia nacional.

Para entrar en la génesis y terminar con la solución a la pregunta problema, es preciso remontarse a la primaria solicitud de extradición de Salvatore Mancuso Gómez quien fuera solicitado por el gobierno americano con Nota Verbal N° 1373, del 20 de septiembre de 2002 y nota verbal N° 732, del 1° de abril de 2004, según resolución de acusación N° 02-388ESH, dictada el 17 de septiembre de 2002, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en la cual se acusa a Salvatore Mancuso Gómez, de conspirar para cometer los delitos de importar 5 kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos desde Colombia; solicitud que fuera conocida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, corporación que mediante decisión calendada el 24 de noviembre de 2004; Acta 106; magistrado ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo, decidió: “CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano, SALVATORE MANCUSO GOMEZ, también conocido como “Mono” y como “SANTANDER LOZADA”; al mismo tiempo el 15 de julio de 2003, se firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito, figurando como uno de los firmantes, Salvatore Mancuso Gómez; luego, con Resolución 091 de 2004, el Gobierno Nacional declaró abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia y el 14 de diciembre del mismo año, con resolución 300, el gobierno reconoció como miembro representante a

Salvatore Mancuso Gómez; posteriormente, el 16 de Diciembre de 2004, se expide la resolución 303, emanada del ministerio de interior y de justicia, la cual, con fundamento en el código de procedimiento penal (Art. 512) y haciendo uso del poder discrecional, el gobierno Nacional suspende la extradición de Mancuso Gómez y la subordina a que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz; entre ellas, abandonar las actividades ilícitas; contribuir a la participación de los miembros de las AUC en el proceso de paz; las cuales cumplía a cabalidad el desmovilizado paramilitar.

Luego de un par de años, el ejecutivo decidió la extradición de Salvatore Mancuso a los Estados Unidos por cuanto en su concepto, “la figura de la extradición y la Ley de Justicia y Paz, no son instituciones excluyentes entre sí”, al estimar que no afectaba los derechos a la verdad, justicia y reparación. (Resolución presidencial N° 137, del 12 de mayo de 2008); al día siguiente, el 13 de mayo de 2008, Mancuso Gómez fue extraditado en un avión de la DEA, a los Estados Unidos y desde ese momento se inició el calvario para las víctimas del desmovilizado Bloque Catatumbo quienes veían como se esparcía como humo en atmósfera, las esperanzas de justicia, verdad, reparación y no repetición.

Salvatore Mancuso Gómez, apenas iniciaba las versiones en el trámite de Justicia y Paz, cuando fue sorprendido intempestivamente con la noticia de su extradición junto con la de doce excomandantes paramilitares más, la noticia del envío a Estados Unidos de Mancuso cayó, como lo refieren las víctimas entrevistadas GVVJ y ECM, como un “balde de agua fría” al proceso de justicia y paz”.

Entre las razones por las cuales se gestó su extradición, se ha ventilado que estaba delinquiendo después de la desmovilización y la otra, que fue una jugada maestra del Gobierno para evitar callar la verdad de los tentáculos del paramilitarismo que lo llevaron a expandirse

exponencialmente en Colombia, a convivir con miembros de la fuerza pública y militares y a tener un grueso control del Congreso de la República.

Escritos presentados por Salvatore Mancuso directamente y a través de apoderado, después de la extradición, al igual que cuestionamientos directos expresados en desarrollo de las audiencias de legalización de cargos ante la Magistrada Alexandra Valencia Molina, reiteraban al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se respondiera cuál fue el motivo por el que se ordenó su envío a los Estados Unidos, por cuanto en sus anexos y sus argumentos, se encontraban certificaciones de despachos fiscales constatando que Salvatore Mancuso Gómez, para la fecha de extradición, no contaba con investigaciones abiertas y menos aún, con sentencias ejecutoriada por hechos posteriores a la desmovilización, adicional, fue el postulado que más cantidad de bienes entregó para reparar a la víctimas y asistía puntualmente a cada versión a la que era citado. El funcionario de justicia transicional EACP, quien estuvo presente en las etapas del proceso de justicia y paz e incluso en la sentencias –entrevistado el 4 de marzo de 2022–, certificó que ciertamente, la Fiscalía y la Magistratura jamás conoció, antes de Mayo de 2014, ninguna noticia criminal, investigación preliminar, investigación previa o imputación de cargos en contra de Mancuso Gómez, que hiciera sospechar el incumplimiento de los compromisos de Justicia y Paz –verdad, justicia, reparación y no repetición–, menos que hubiera incurrido en algún delito.

Es decir, no hubo soporte legal que justificaran la extradición; sin embargo, se recuerda que inicialmente el mismo Gobierno vociferó al público por los distintos medios de comunicación que la extradición de los paramilitares obedecía al hecho de haber reincidido en delitos después de la desmovilización y el otro, por no colaborar en el proceso de Justicia y Paz; así textualmente lo dijo el presidente Uribe: “... el Gobierno extraditó a los ex paramilitares

porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega” (Verdad Abierta, 2010); no obstante, nada de eso fue cierto; la verdad expuestas unos días después, publicada en medios de comunicación y ratificada por varios de los postulados extraditados, entre ellos Salvatore Mancuso, señala que la verdadera razón para extraditar a Mancuso, fue callarlo, luego de relatar la cercanía que tuvo Francisco Santos, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios del gobierno con los paramilitares; en las versiones Mancuso señaló en numerosas ocasiones, hechos y relaciones directas o con personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez; entre otras encontramos:

En primer lugar, expresó que se reunió en más de diez ocasiones con Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno del gobernador Álvaro Uribe Vélez, para tratar temas sobre conformación de las convivir, entidades que posteriormente conformaron grupos de autodefensas; En segundo lugar, apoyó la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez, con publicidad, incluso, algunas regiones del Catatumbo, vehículos al servicio de los paramilitares se encargaron de trasladar ciudadanos a los centros de votación. En tercer término, relató que entre los cuatro helicópteros, que sobrevolaron Ituango durante la masacre de los paramilitares, uno era de la Gobernación de Antioquia, momentos en que fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez y por último, se entrevistó con Álvaro Uribe Vélez en la finca el Ubérrimo. Finalmente, para las fechas de las masacres de la Granja y El aro, ocurridas en el departamento de Antioquia, el Gobernador de la época era Álvaro Uribe Vélez, quien, en palabras de los paramilitares alias Diego Fernando Murillo, alias Don Berna y Mancuso Gómez, alias Triple Cero o El mono, señalan que Álvaro Uribe tenía conocimiento de estas (Pacifista, 2018).

7.3. Consecuencias de la extradición de Salvatore Mancuso a los Estados

Unidos

Cualquiera que haya sido la razón por la cual se extraditó a Salvatore Mancuso a los Estados Unidos, ninguna justificaba el menoscabo, la afectación de los derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición; resaltando con base en los argumentos conocidos, que el Gobierno Nacional no sopesó el derecho de las víctimas contra el compromiso de cooperación internacional de lucha contra la impunidad, denominado extradición, o mejor, privilegió el interés de políticos, comerciantes, empresarios, miembros de las fuerzas armadas del Estado y funcionarios del gobierno, como el presidente Álvaro Uribe Vélez y el vicepresidente Francisco Santos y entregó al paramilitar que conocía la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia, a partir de colaboradores y auspiciadores a nivel nacional y en las altas esferas del gobierno.

Como funcionario que participó en todas las versiones hasta llegar a la primera sentencia en contra de Mancuso, dice “EACP, “tengo mis reparos con la virtualidad, porque choca con los mismos principios del derecho” y dada la extradición de Salvatore Mancuso, fue una obligación acudir a la virtualidad para tenerlo presente en el proceso de Justicia y Paz, pero, manifiesta: “con Mancuso había problemas con la comunicación, a veces los americanos no lo sacaban, muchas veces se dañaba el audio, o la imagen, o no había señal”; es claro, replica que “no es lo mismo tener una persona a miles de kilómetros que presente en el proceso”. Algunas veces los fiscales se vieron obligados a viajar a EEUU, que, en costos y tiempo, fue más complicado y generó obstáculos; fueron varias las versiones que debieron aplazarse por los inconvenientes para tenerlo en las distintas diligencias. Es repetitivo e insistente en manifestar que extraditar a Salvatore Mancuso no fue lo mejor para el proceso de Justicia y Paz y señala: “no entendí cómo

el máximo comandante de las autodefensas había sido extraditado, supuestamente por narcotráfico, cuando en Colombia debía responder por crímenes de lesa humanidad”.

Las estadísticas presentadas por la MAPP-OEA, con relación a la participación de los postulados extraditados en versiones y audiencias de Justicia y Paz, señaló: “En efecto, son ilustrativos los casos de Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo Serna pues ambos habían realizado en Colombia 15 versiones libres al momento de su extradición (13 de mayo de 2008), el primero de ellos en año y medio y el segundo en once meses; pero después de ser extraditados, en los últimos tres años sólo han realizado 10 audiencias. También son llamativos los casos de Carlos Mario Jiménez, Ever Veloza y Rodrigo Tovar Pupo quienes no registran versiones libres a partir de su entrega a las autoridades de los Estados Unidos, habiendo participado en 9, 57 y 15 versiones respectivamente antes de su extradición” (OEA, 2011), luego es innegable que la extradición afectó sustancialmente el proceso de Justicia y Paz.

Evidentemente, la extradición de Salvatore Mancuso Gómez significó un traspies, una zancadilla al proceso de justicia transicional que deterioró los derechos de las víctimas, afectó la credibilidad de ellas en el proceso de Justicia y Paz y significó un menoscabo los derechos a la verdad, justicia y reparación, lo cual se generó a partir de la decisión del Gobierno Nacional de enviar a los Estados Unidos a Mancuso Gómez, lo que indica, así lo ratificó en entrevista el funcionario “EACP”, que el gobierno nacional, al principio dio los recursos, ofreció apoyos, pero, luego se convirtió en una talanquera para el proceso de Justicia y Paz.

En su entrevista, la víctima GVVJ (Marzo 4 de 2020), relató que pasada la desmovilización del grupo armado de paramilitares que operaban en Norte de Santander y otras regiones, escuchó por los medios de comunicación el llamado a las víctimas, para que se presentaran ante la unidad de justicia transicional y reclamaran sus derechos; lo que la motivó a

inscribirse como víctima y le generó expectativas en el proceso de Justicia y Paz, principalmente para conocer los motivos de la desaparición de su familiar, el lugar de ubicación de los restos y darles sepultura, pero, todo se desmoronó, pocos días después, al enterarse de la extradición del excomandante del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso Gómez; resalta y deja claro su pensamiento, en cuanto “nunca tuve realmente la posibilidad de enfrentarse con el postulado Mancuso Gómez”, “no pude reclamar los motivos por los cuales fue desaparecido y dónde están sus restos”. La víctima consideró que, si bien inicialmente tuvo la oportunidad de preguntar a los demás postulados, no estaba el comandante que los mandaba y se quedó con el deseo de preguntarle directamente a él. Para las víctimas la presencia del postulado extraditado Mancuso Gómez, de forma virtual y ocasional, fue una burla al proceso de justicia y paz, reclamaban la necesidad de tenerlos frente a frente y poderlos increpar por los hechos cometidos.

Una vez ejecutada la extradición de Mancuso a los Estados Unidos, pasaron seis largos meses de silencio absoluto y luego de ello, desde Washington el 10 de noviembre de 2008, Mancuso reanudó sus versiones con Justicia y Paz. El funcionario de justicia transicional “EACP” entrevistado el 4 de marzo de 2022, manifestó que no fue fluida la intervención del postulado, en su gran mayoría las fechas programadas se perdían; el compromiso con las autoridades americanas no fue formalmente estructurado; se presentaron múltiples obstáculos que iban desde la diferencia horaria; el concepto y materialidad de justicia americana con la local, allá un proceso no es repetitivo, es más célere y el proceso de Justicia y Paz por el contrario, es repetitivo, lento y demorado; en numerosas ocasiones no había señal, no había computadores o no había personal en la cárcel de EEUU para sacar al postulado a versión; otras se suspendieron por deficiencia en la comunicación local o en USA y otro tanto más, por razones de seguridad o de salud del postulado; o porque no se tramitó el permiso y finalmente por no

allegar, previa a la versión, copias en inglés, de los hechos materia de la diligencia, cuando no porque el postulado no contaba con los documentos contentivos de los múltiples hechos a versionar, confesar o aceptar; entre tanto, las víctimas que en principio acudía juiciosas a las distintas versiones y audiencias, se observaban tristes y cabizbajas, esperando la verdad de viva voz del comandante paramilitar que les causó graves delitos violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y al poco tiempo, perdieron el interés y las salas, otrora llenas, se observaban vacías.

Surge incuestionable la construcción de la verdad a partir de la confesión del postulado al proceso de Justicia y Paz, enriquecida con aditamentos como la versión de las víctimas, las tareas de policía judicial y finalmente y no menos relevante, el análisis del operador judicial, quien, a través de la sentencia, con características de acierto y legalidad, le da el estatus de verdad judicial. Destaco que la génesis de la construcción de la verdad se erige a partir de la versión del postulado, entonces, he aquí la talanquera que se cierne si quien está llamado a expresar a construir, a develar la verdad, en términos de redes de apoyo, auspiciadores y financiadores, Policías, FFAA, miembros de la Fiscalía, empresarios y políticos, hoy y desde principios del año 2009, se encuentran ausentes en gracia de la extradición ordenada por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Ahora bien, de acuerdo con el Centro Internacional de Toledo para la Paz (2018, p. 29), de un universo de 51 sentencias analizadas, se coligió que los hechos perpetrados judicializados, por señalamientos de las redes de apoyo, fueron: “Ejército 210; Armada 8; Policía Nacional 171 y Empresas y/o empresarios 187”, datos que se obtuvieron del análisis de las sentencias proferidas dentro del proceso penal especial de Justicia y Paz en el periodo comprendido entre 2009 y octubre de 2017. La pregunta que nace a partir de estas cifras es, si ciertamente estas

cifras constituyen una realidad o están alejadas de ellas, por cuanto deviene de versiones de mandos medios y no los máximos comandantes con quienes se reunían generales, coroneles, gobernadores, alcaldes y congresistas.

Con el inicio de las versiones, los postulados a la ley de Justicia y Paz empezaron a detallar nombres de informantes, contactos, seguidores, colaboradores y financieros de las autodefensas y estrategias desplegadas para copar el territorio colombiano; no obstante, la verdad solo se quedó en el inicio, por cuanto una vez se produjo la extradición masiva de los ex paramilitares, la verdad de Justicia y Paz, se vio afectada. Los extraditados, ya no salían a las versiones, el supuesto compromiso de conectarlos por video conferencia, adquirido por el gobierno Americano, no se cumplió; en las salas de audiencias y versiones, además del rostro tristes de las víctimas reflejado por la muerte de sus familiares, se dibujaba un incierto panorama, un desconcierto y una verdad, que solo conocerían a medias.

Recuérdese que durante los primeros pasos del proceso de Justicia y Paz, para los años 2007 y 2008, los excomandantes paramilitares internos en la cárcel “La Paz” de Itagüí, prometían contar la verdad sobre la hegemonía paramilitar en el Colombia, su génesis, expansión y redes de apoyo, cuando sorpresivamente fueron extraditados; las preguntas ahora, a partir de las sentencias transicionales en firme y de la extradición de los comandantes paramilitares son: ¿El país conoce hoy toda la verdad sobre la participación de los paramilitares en el conflicto armado? ¿Se sesgó la reconstrucción histórica de los hechos con la extradición de los paramilitares a los Estados Unidos? ¿Se afectó el derecho de las víctimas a la verdad plena, es decir a la justicia, con la extradición de los paramilitares, comandantes de estructuras?

En entrevistas efectuadas el 4 de Marzo de 2022, las víctimas GVVJ y ECM al unísono manifestaron que la extradición a los Estados Unidos, del comandante paramilitar Salvatore

Mancuso Gómez, “no solo le restó credibilidad al proceso de Justicia y Paz, sino que además, se llevó parte de la verdad y la reparación que reclamamos las víctimas”, en sus palabras, las dos víctimas reiteraban que la ausencia del comandante paramilitar, que en su criterio estaba obligado a asistir al proceso de Justicia y Paz, “había sido quitarle el eslabón más fuerte de la cadena”. Pero, no solo desde la óptica de las víctimas se ha criticado la extradición del postulado Mancuso, incluso el mismo funcionario de Justicia Transicional entrevistado “EACP”, ha señalado que la extradición de Salvatore Mancuso Gómez fue una decisión desacertada que llenó el proceso de Justicia y Paz de dudas y le quitó legitimidad, las víctimas del Bloque Catatumbo quienes reclamaron su presencia en las distintas audiencias y no entendían por qué se había enviado a los Estados Unidos al máximo comandante paramilitar responsable de los violentos y sangrientos hechos cometidos en el departamento; parecía, dice el funcionario “EACP”, que las víctimas veían en Mancuso Gómez como un símbolo, como un líder de los desmovilizados y la única persona que conocía la verdad de los hechos, que podía reparar los daños causados y que debía pagar con cárcel en Colombia, los delitos cometidos.

Reitera el funcionario de justicia transicional “EACP”, “extraditar al máximo comandante del grupo paramilitar, “no fue lo mejor que le pasó al proceso de Justicia y Paz”, de hecho expresa con sinceridad, fue un proceso que se aprendió sobre la marcha, fueron pocas las capacitaciones que se recibieron, fuimos haciendo ajustes en medio del desarrollo de proceso; se hicieron propuestas por parte de los despachos; no había conceptos claros entre los funcionarios, incluso, ratifica, había choques entre los mismos magistrados, personalmente presenté tres decisiones de una misma sala contrarias en sus teorías y nos vimos obligados a echar mano a la creatividad y al sentido común; fue un proceso improvisado por los mismos funcionarios y por las partes; la ausencia del postulado extraditado, reclamada su presencia por las víctimas, fue

justificada por los funcionarios como no necesaria para la continuidad del proceso, en cuanto en Colombia estaban los autores materiales que conocían la verdad de los hechos y se garantizaba la reparación con los bienes entregados, sin embargo, guardaban la esperanza que Mancuso fuera conectado y que las múltiples audiencias aplazadas, pudieran realizarse.

Para las víctimas de los desmovilizados paramilitares, la justicia era entendida en el marco de un proceso ordinario, es decir, una justicia procesal, con imposición de una pena privativa de la libertad al responsable acá en Colombia; por estas razones no sintieron satisfechos los derechos a la verdad, reparación y no repetición, pues el máximo responsable, Mancuso Gómez, había sido extraditado por el gobierno nacional a los Estados Unidos por narcotráfico y las víctimas en Colombia se quedaron esperando. La víctima “ECM” refiere no entender por qué fue enviado a pagar una pena “por un delito; por uno menos grave de los miles de delitos” que afectaron los Derechos Humanos. Estas apreciaciones de las víctimas, si partimos de la responsabilidad de los desmovilizados paramilitares, como autores de graves violaciones a los Derechos Humanos, deja claro su descontento por la extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos y su comprensión de la prevalencia del derecho a las víctimas sobre la extradición como una decisión unilateral del gobierno colombiano que deslegitimó el proceso de Justicia y Paz.

Es claro que el derecho de las víctimas a conocer la verdad histórica de los hechos ocasionados por el grupo paramilitar, cuyo máximo comandante fue Salvatore Mancuso Gómez, se frustró por la extradición a los Estados Unidos, como también el derecho a la justicia y reparación; pero, no fueron los únicos afectados, el país entero, vio cómo se perdía la esperanza de conocer a los verdaderos autores materiales del accionar paramilitar que, más que permitir, auspiciaron la llegada de las estructuras armadas a varias regiones y que propiciaron su expansión exponencial, en especial, los colaboradores –alcaldes, gobernadores, concejales,

senadores, representantes a la cámara–, determinadores –altos miembros de la Policía, el Das, la Fiscalía y el Ejército– y financiadores –Empresas, Comerciantes, Multinacionales– que permitieron la expansión sustancial del grupo armado ilegal y la creación de nuevas estructuras en el territorio nacional, bajo el manto equivocado y disfrazado de la lucha antisubversiva.

Una vez se produce la extradición de los ex jefes paramilitares, se desató en Colombia, el cuestionamiento respecto de cuáles fueron los reales fundamentos que motivaron la orden de extradición y qué afectaciones se generaron con esta decisión dentro del proceso de Justicia y Paz, escenario en el cual, estaban llamados estos ex jefes paramilitares, a reconstruir la verdad jurídica e histórica de los hechos, en cuanto a móviles, autores materiales e intelectuales, circunstancias de tiempo, modo y lugar y principalmente, la génesis del conflicto armado, en términos de colaboradores, auspiciadores, instigadores y autores intelectuales, que no es otro, que el derecho a la verdad que lleva ínsita, la reparación, en palabras de la Corte Suprema de Justicia:

La verdad es un valor esencial del proceso de Justicia y Paz porque tanto las víctimas como la sociedad tiene derecho a conocer lo realmente acontecido en desarrollo del conflicto armado y, por ello, se trata de una obligación infranqueable a cargo de los postulados a los beneficios penales de la Ley 975 de 2005, confesar y relatar los sucesos punibles que cometieron directa o indirectamente, así como de los que conocieron por su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, tanto en las versiones libres al interior del proceso transicional como en las declaraciones que brinden ante las autoridades que los requieran (Corte Suprema de Justicia, 2020).

Y es que la reconstrucción de verdad histórica del conflicto, desde todo punto de vista, constituye una actividad integralmente positiva en tanto, funciona como un antídoto contra la repetición de la violación a los Derechos Humanos, permite, construir una memoria colectiva que evidencia los hechos victimizantes, los extrae del olvido y permite conocerlos; genera satisfacción y descanso a la víctimas y libera al desmovilizado de cargas psicológicas en procura de la resocialización de quien al final, recibe como retribución, una pena alternativa. Lo antes referido, se atenúa con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, Sector Justicia y del Derecho, Título 5º, Justicia Transicional, Capítulo 1, Proceso penal especial de justicia y paz, Sección 1ª, Marco General. Art. 2.2.5.1.1.1. Naturaleza del proceso penal especial de justicia y paz; inc. 2º que expresamente señala: "... la colaboración con la justicia y el esclarecimiento de la verdad, a partir de la confesión plena y veraz de los hechos punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, constituyen fundamento del acceso a la pena alternativa", bajo el entendido que es la verdad, la reparación y la justicia, lo que anhelan las víctimas, y ellas son el eje fundamental del proceso de Justicia y Paz.

En el proceso de Justicia y Paz fue relevante el papel que desempeñaron las altas Cortes, tanto las nacionales como, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la aplicación de una norma novedosa y sin experiencia académica en el tema se reflejó en las diferentes decisiones de los tribunales de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que expedían decisiones contrarias, no solo con otros magistrados, sino incluso en la propia sala. Abordaron temas de exclusión de postulados, sustituciones de medidas de aseguramiento, sentencias alternativas y suspensión del derecho de dominio sobre bienes, entre otras, de las cuales no se tenía antecedentes en la justicia colombiana y la jurisprudencia nacional.

Las contradicciones en las que incurrieron fue producto de la inexperiencia, pero, además de la improvisación y la falta de capacitación; se evidenció numerosas providencias en las que se excluía a los postulados por delitos posteriores a la desmovilización y luego se abstenían de tal decisión (Entrevista EACP), así mismo se presentaron decisiones en las que se negaba la sustitución de la medida de aseguramiento por unos requisitos, en tanto al día siguiente se concedía la misma por tenerlos como cumplidos.

Pero no fue solo los temas de Justicia y Paz los que generaron decisiones contrarias, lo mismo ocurrió con el tema de la extradición; en principio la Corte Suprema de Justicia, entre el año 2008 a 2015, conceptuó favorablemente las solicitudes de extradición elevadas, dentro de las cuales estuvieron las extradiciones de los excomandantes paramilitares; sin embargo, luego de analizar y sopesar los derechos de las víctimas de delitos violatorios a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, versus el mecanismo de la extradición como lucha contra la impunidad, cambiaron su postura y emitieron conceptos negativos a las solicitudes invocadas por el ejecutivo, por ejemplo: Sala de Casación Penal, Rad. N.º 42380, del 21 de Enero de 2015; Sala de Casación Penal, Rad. 58431, del 26 de Enero de 2022; Corte Suprema de Justicia, Rad. N 3464 de 2018; MG.PTE. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero; AP3464-2018; Radicación No. 53061; Acta N° 268; Bogotá, 15 de agosto de 2018; Corte Constitucional, Sentencia C-112 de 2019.

En estas decisiones se priorizan los derechos de las víctimas dentro del trámite de la justicia transicional, haciendo incluso una diferenciación entre los procesos penales ordinarios y los de Justicia y Paz, con miras a señalar que los transicionales prevalecen en cuanto tienen por objeto lograr la judicialización de los victimarios y reparar a las víctimas en sus derechos a verdad, justicia y reparación y esencialmente terminar con las diferencias sociales que generan

los conflictos como lo son la inequidad social, la violencia, la pobreza, la falta de servicios públicos esenciales y la ausencia del Estado, lo cual significó violaciones masivas de Derechos Humanos y que fue condensado en el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017, que hace referencia a la no extradición delimitando la decisión con tres características; temporal, material y de sujeto agente; las conductas relacionadas con el proceso de paz con las Farc; por hechos cometidos hasta el 1º de diciembre de 2016 y perpetrados por los exintegrantes de las Farc-EP, a quienes se acusen de formar parte de dicha organización, pero, que se sometan al SIVJRNR, al igual que se extiende a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los miembros de ese grupo.

Si bien el país presentó desde principios de la década de 1980 una política de extradición, como una herramienta de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad, denominada “cooperación judicial internacional”; posteriormente, en el año 2009 las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en tratándose de postulados a la Ley de Justicia y Paz, modificó esta política, con el potísimo argumento de la violación a los derechos de las víctimas, razón por la cual se generó una tendencia de conceptuar negativamente la solicitud de extradición; el hito de negativa, lo marca el caso de Luís Edgar Medina Flórez alias Comandante Chaparro, desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, quien se acogió al proceso de Justicia y Paz en el año 2006, pero, quien fue pedido en extradición por una Corte de los Estado Unidos por los delitos de narcotráfico y, cuyo concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia en el agosto de 2009, fue negativo para conceder la extradición, en conclusión señaló la Corte: “vulneraría las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la lucha contra la impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad, y de donde resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana que quedarían sin

posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación por los crímenes cometidos por los grupos paramilitares” (El Tiempo, 2009). Retomando las palabras del Magistrado Augusto Ibáñez: “... la decisión tomada de negar la extradición del desmovilizado tiene el claro objetivo de priorizar la protección de las víctimas y los compromisos internacionales firmados por Colombia en materia de Derechos Humanos.” (Corte Suprema de Justicia, 2009).

Así que desde agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia, dio inicio a una seguidilla de decisiones negativas de conceder la extradición a postulados de la Ley 975 de 2005, entre otros, en los casos de Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, ex jefe del Bloque Héroes de los Montes de María Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, ex jefe financiero del Bloque Centauros y Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, todas estas, bajo el amparo de que conceder la extradición, constituía una vulneración de los derechos de las víctimas a conocer la verdad.

Queda claro que se debe negar la extradición bajo el amparo de investigar y juzgar las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, causados por los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, en pro de alcanzar los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dirigidos a la protección de los derechos de las víctimas, siendo esta la nueva corriente que se vislumbra en las altas cortes y que acogieron en virtud del Proceso de Paz con las Farc-EP. Es importante señalar que no es cualquier verdad, no es una verdad amañada, a medias o sesgada la que debe reconstruir el postulado; la verdad que exigen el sistema jurídico, las víctimas y al reconstrucción histórica de los hechos es una verdad real, con características de tiempo, modo, lugar y autores, una verdad “plena y veraz” de forma tal, que satisfaga a las víctimas, que cumpla con el efecto

positivo en acápite anterior señalado “reparar”, y que logre ser considerada como justicia, de tal forma que permita el acceso de los postulados a los beneficios transicionales; una verdad no solo de los hechos en detalle, homicidios, desplazamientos, desapariciones, delitos de género, despojos, etc., sino adicional y especialmente, la verdad del contexto operacional y expansivo del grupo ilegal armado de paramilitares.

No todo lo expresado por el postulado, es considerado como verdad exclusivamente, pues ésta es confrontada y/o asentida por las víctimas y, por demás, verificada a través de los distintos organismos judiciales e investigativos de corroboración, propios del sistema de Justicia y Paz, Fiscalía y Tribunales, siendo esta última Corporación, Tribunal de Conocimiento, el despacho que genera una sentencia y es ahí, en esta providencia, en la cual se establece la verdad judicial de lo acontecido, cuyo ideal o deber ser, es que se identifique con la verdad histórica de los hechos.

En relación con la verdad judicial, es acertado retomar lo expresado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITIpax, 2011, p. 7):

En este documento nos concentramos en los elementos centrales de la construcción de verdad que aparecen en las decisiones judiciales, esto es, las circunstancias fácticas clásicas de la comisión de los delitos, la determinación de la identidad de los autores materiales, la indagación de los móviles inscritos en la lógica de actuación de las estructuras armadas, y las redes de apoyo a dichas estructuras, redes que han sido señaladas tanto en las fuerzas armadas como en el empresariado. Con una mirada centrada en las víctimas, encontramos que la narración final de los hechos probados es un espacio de construcción de verdad judicial en el que pueden entrar en disputa los relatos de las víctimas y los de los

procesados, aunque en muchos casos coinciden, y entonces enfocamos la lente sobre la determinación de cuál es el testimonio o la versión que prevalece. Asuntos tales como la verdad contextual en sentido más amplio quedan para futuras investigaciones.

Desde esta óptica, es incuestionable la trascendencia que la versión del postulado, tiene en la reconstrucción de la verdad dentro del proceso de Justicia y Paz, intervención que reviste mayor relevancia, si nos enfocamos a los postulados que ostentaron los cargos de máximos comandantes de las estructura armadas ilegales paramilitares, que hace parte del proceso de Justicia y Paz, quienes lideraron la desmovilización y fueron protagonistas materiales, junto con los hermanos Castaño Gil, de la expansión y el crecimiento exponencial del aparato organizado de poder que desplazó a millares de colombianos, pintó con sangre inocente los campos y frustró el sueño de centenares de familias. He ahí la importancia de Mancuso Gómez para esclarecer estas verdades negadas, ocultas, disfrazadas o desconocidas por los mandos medios de los grupos paramilitares y reclamadas hasta la saciedad por las víctimas y por un país interesado en conocer cómo un puñado de hombres atomizados en varios departamentos, terminaron con dominio en gran parte del país, imponiendo la ley del más fuerte, la ley de la muerte, con un control político, social e institucional que le arrebataron o les entregó el Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución calendada el 3 de septiembre de 2020 (solicitud de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias), refiriéndose a lo casos que fueron de su conocimiento y fallo (La Masacre de Pueblo Bello; La Masacre de Ituango; Masacre de la Granja; Masacre del Aro y el caso Jesús María Valle Jaramillo y otros) en las cuales la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano por graves violaciones a Derechos Humanos y en cada caso ordenó

determinadas medidas de reparación, entre ellas “la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos que generaron las violaciones”. Ante el incumplimiento del Estado colombiano, la representación de las víctimas, entre estos la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, elevaron solicitud medidas provisionales mediante escritos del de 21, 27 y 28 de agosto de 2020; posteriormente, la presidenta de la Corte, solicitó al Estado colombiano que, a más tardar el 31 de agosto de 2020, “remitiera sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales planteada por las representantes”; en relación a las referidas solicitudes y con fundamento en decisiones de tres casos de los años 2006 y 2008, la Corte emitió resolución decretando medidas provisionales para proteger el “derecho al acceso a la justicia de las víctima” ante “la inminente deportación a Italia de Salvatore Mancuso”.

Con la decisión de la Corte, se da un espaldarazo a las víctimas reclamantes de los derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición para que se repatrie o regrese al ciudadano colombo-italiano, Salvatore Mancuso a Colombia, no solo como cumplimiento de los compromisos suscritos por los dos gobiernos al momento de autorizarse la extradición –mayo 12 de 2008–, sino ante todo, por la necesidad que tienen las víctimas de las garantías al acceso a la justicia, verdad, reparación y no repetición de quien les violentó los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario con graves crímenes.

Igualmente, en la aludida resolución ordenó al Estado colombiano “se abstenga de adoptar cualquier acción que pueda obstaculizar dicho trámite” debido a la responsabilidad en las masacres y casos arriba señalados, pero, la Corte fue más allá y siendo garantista de los derechos de las víctimas en general del conflicto armado, de los hechos atroces de los paramilitares (homicidio, hurtos, masacres, homicidios, delitos de homicidio en persona

protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento y desplazamiento forzado, tratos crueles e inhumanos, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias) que en consideración se presentaron con la omisión, beneplácito o ayuda del Estado (miembros de la Fuerza Pública y agentes estatales) los cuales vienen gozando de impunidad por la “la falta de vinculación a proceso de paramilitares que participaron ...” , considera de vital importancia contar con la participación de Salvatore Mancuso en el proceso de Justicia y Paz, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos y establecimiento de responsabilidades, sin perjuicio de la sentencia dictada en agosto de 2020 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Justicia y Paz, condenando a Mancuso Gómez por el caso de Ituango; El Aro y en la masacre de Mapiripán, sanciones penales que a juicio de la Corte, están pendientes de ejecución y por el cual se ordena al Ministerio de Justicia y del Derecho proceder con la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia”, como lo expresó José Miguel Vivanco para la Revista Semana:

Sin embargo, es supremamente preocupante que el gobierno colombiano haya solicitado por tres ocasiones, la extradición de Mancuso Gómez a Colombia, pero, por errores de forma en la petición de la solicitud – el delito por el que se solicita no es delito en Estados Unidos – dos de ellas fueron rechazado de plano por la embajada americana – (Investigación, “Si Mancuso termina en Italia es por la burda negligencia del Gobierno”: Vivanco; Semana, 15/8/2020), o sea, no se ha cumplido; lo cual es inconcebible dada la peligrosidad y la categoría de la persona que se ha solicitado en extradición y más aún la gravedad de los delitos por los cuales debe responder en Colombia. Resaltando que el excomandante paramilitar recuperó la libertad en USA el 27 de Abril de 2020 y una vez cumplió la pena allí impuesta de 15 años, ha presentado a través de sus abogados, numerosos recursos y

peticiones abogando por la deportación a Italia, cuya nacionalidad ostenta y que de cumplirse, continuaría con la impunidad que a brillado desde que fue extraditado a Estados Unidos; con la gravedad, que “entre Italia y Colombia no existe un tratado de extradición, y que Italia tiene una práctica reiterada de no extraditar a sus nacionales” (Semana, 2020).

En la actualidad el excomandante paramilitar Mancuso Gómez, cuenta con más de 18 órdenes de captura internacional, dictadas en su mayoría por los Tribunales de Justicia y Paz de Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga y una más por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de Ejecución de sentencias para los tribunales de Justicia y Paz del territorio nacional.

Desde el momento en que Salvatore Mancuso Gómez fue extraditado a los Estados Unidos, ese 13 de mayo de 2008, se ha rumorado públicamente que fue una decisión magistral del ejecutivo, “una jugada de jaque mate”, no solo al proceso de Justicia y Paz, sino a la reconstrucción de la verdad y la justicia; con Salvatore Mancuso se fueron muchas verdades y políticos, militares, comerciantes y personalidades prestantes del país, respiraron aire fresco con su partida; ahora con la inminente extradición a Colombia, de nuevo muchos empiezan a preocuparse y por ello, tal vez esa es la razón por la cual la peticiones presentadas a al gobierno de los Estados Unidos fueron mediocres y rechazadas de plano dos veces, pero gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mancuso ya no tiene un pie en Italia, sino en Colombia.

Así se gestó un nuevo episodio en el que medio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al gobierno colombiano a modificar su posición negligente, pasiva y paquidérmica en relación a Mancuso Gómez y activar las gestiones y trámites internacionales para asegurar el retorno del paramilitar a Colombia, no solo para que responda ante las víctimas

por las graves infracciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sino adicional, para cumplir con el derecho a la justicia verdad y reparación que reclaman las víctimas y en su totalidad el país.

8. Conclusiones y Recomendaciones

En el caso de la existencia de dos instituciones que se contraponen, como la extradición y los derechos a las víctimas; en donde hay petición de un país, para la extradición del nacional, en virtud de ser procesado por la comisión de una conducta que afectó un país diferente a Colombia, debe primar la aplicación de la justicia nacional, con énfasis en el derecho de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

Las normas internacionales como la jurisprudencia de las altas cortes y la normativa nacional, promueven el reconocimiento de la calidad de víctima y de los derechos inherentes a esa condición, con prevalencia de otros derechos e incluso de los compromisos del Estado con otros países en virtud de tratados o acuerdos internacionales; lo que indica que la prioridad de los gobiernos se debe centrar en las víctimas y sus derechos en cuanto hayan sido objeto de violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Los ciudadanos colombianos, solicitados en extradición por otro país, y que estén vinculadas por responsabilidad penal directa o indirecta con el trámite de justicia transicional, no debe ser conceptuada favorablemente por la Corte Suprema de Justicia, bajo la prioridad de la aplicación de la justicia nacional, del derecho a la verdad, derecho a la reparación y no repetición de los hechos victimizantes.

Si la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable sobre la extradición de un ciudadano colombiano, el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República tiene la potestad para negar, suspender o condicionar la extradición por motivos de conveniencia nacional, por

ejemplo, por cuanto la persona solicitada se encuentra vinculada a un proceso penal ordinario o transicional en Colombia que implica violación a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como lo es la justicia, la verdad y la reparación; hasta tanto el solicitado en extradición, termine el proceso con sentencia ejecutoriada y cumpla totalmente la pena, de tal forma que se satisfagan los derechos de las víctimas.

El mecanismo de la extradición no debe ser utilizado para garantizar la impunidad de los partícipes de delitos en el territorio nacional que afectaron multiplicidad de víctimas y que quedaron olvidados en los archivos de los juzgados y fiscalías, esperando la reconstrucción de la verdad, la justicia y la reparación de quienes con la misma o mayor responsabilidad que los postulados extraditados, se pasean orondos libres, fungiendo como honestos políticos, militares y comerciantes; mientras las víctimas lloran a sus familiares y reclaman sus derechos.

La presencia material de los procesados en los trámites de justicia transicional es relevante, importante y necesaria para el cumplimiento de los fines de los procesos de Justicia y Paz, como un elemento representativo reparador para las víctimas quienes necesitadas de justicia, verdad, reparación y no repetición, buscaban en el postulado Salvatore Mancuso Gómez, la respuesta a sus dudas, respecto a móviles del hecho, los autores materiales e intelectuales detrás de cada hecho; si bien es cierto, Mancuso Gómez no participó en la mayoría de los hechos, su presencia en las versiones y audiencias con los demás postulados, coadyuva, genera confianza e impulsa a la reconstrucción de los hechos.

La extradición del postulado Mancuso Gómez generó en el proceso de Justicia y Paz inconformidades en todos y cada uno de los integrantes, como las víctimas, los fiscales, los procuradores e incluso en los mismos magistrados que pacientes en los despachos o en audiencias, se limitaron a observar la imposibilidad repetitiva de asistir a las audiencias virtuales

y en el mejor de los casos, se conformaban con su presencia por dos o tres horas diarias, alargando más y más el proceso transicional y por ahí mismo ocasionando en las víctimas sufrimiento y revictimización.

Las víctimas perciben que sus derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición, les fueron quebrantados con la extradición del paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a los Estados Unidos, aún más, cuando se ve lejano su retorno al país, para que responda por los numerosos hechos perpetrados en Colombia, reclamo que hacen las víctimas a través de los medios de comunicación, en las audiencias y en los distintos actos públicos de reconciliación, lo cual ha sido convalidado y ratificado por la Corte interamericana de Derechos Humanos, requiriendo al Estado colombiano para que obtenga la repatriación del extraditado Salvatore Mancuso Gómez y más allá de tenerlo en nuestro país, que garantice la continuidad de la participación en el proceso de Justicia y Paz, con la reconstrucción de la verdad y en cumplimiento de la justicia, reparación y no repetición.

El Estado colombiano debe implementar los mecanismos y medidas necesarias con los países a los cuales se extraditan los ciudadanos colombianos, a efectos de obligarlos a que sean repatriados, una vez se termine el proceso o se cumpla la pena del delito por el cual fueron solicitados en extradición, con el fin de satisfacer con los aportes de justicia, verdad, reparación y no repetición con las víctimas.

- Recomendaciones

Es necesaria la implementación de un mecanismo de control político sobre la viabilidad de la extradición de aquellas personas investigadas, procesadas o responsable de delitos de lesa humanidad por hechos que afectan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional

Humanitario, en virtud de privilegiar los derechos de las víctimas al cumplimiento de compromisos internacionales de lucha contra la impunidad.

Colombia está rezagada en la creación de un verdadero tribunal de responsabilidad que juzgue no solo a los responsables directos de los delitos lesivos de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como a quienes coadyuvaron a que los paramilitares se expandieran y permitieron que se cometieran estos delitos, igualmente a los funcionarios del Estado que permiten que la impunidad continúe errante y que las víctimas se sientan burladas por los máximos victimarios extraditados.

9. Referencias Bibliográficas

Centro Internacional de Toledo para la Paz. (2018). La verdad en las sentencias de Justicia y Paz. Un estudio cuantitativo sobre los hechos, sus principales narradores y las redes de apoyo develadas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). El derecho a la justicia como garantía de no repetición; Volumen II, Centro Nacional de Memoria Histórica; Bogotá 2016.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Acto Legislativo No. 01 de 2017, *Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 50.196 del 4 de abril de 2017.

_____. Acto Legislativo No. 02 de 2017, *Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Diario Oficial No. 50.230 del 11 de mayo de 2017.

_____. Ley 95 de 1936. *Código Penal*. Diario Oficial No. 23316 del 24 de octubre de 1936.

_____. Ley 81 de 1993, *Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal*. Diario Oficial No. 41.098 del 2 de noviembre de 1993.

_____. Ley 104 de 1993, *Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial No. 41.158 del 31 de diciembre de 1993.

_____. Ley 418 de 1997, *Por la cual se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial No. 43.201 del 26 de diciembre de 1997.

_____. Ley 548 de 1999, *Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial No. 43.827 del 23 de diciembre de 1999.

_____. Ley 782 de 2002, *Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.* Diario Oficial No. 45.043 del 23 de diciembre de 2002.

_____. Ley 975 de 2005, *Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.* Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005.

_____. Ley 599 de 2000, *Por la cual se expide el Código Penal.* Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000.

_____. Ley 1448 de 2011, *Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.* Diario Oficial No. 48.096 del 10 de junio de 2011.

_____. Ley 1592 de 2012, *Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.633 del 3 de diciembre de 2012.

_____. Ley 1820 de 2016, *Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones*. Diario Oficial No. 50.102 del del 30 de diciembre de 2016.

_____. Ley 1957 de 2019, *Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz*. Diario Oficial No. 50.976 del 6 de junio de 2019.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-572 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero.

_____. Sentencia C-548 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

_____. Sentencia C-370 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y otros.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Resolución del 8 de julio. Caso Masacre Maripán contra Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Comunicado de Prensa No. 21 de 2009.

_____. (2005). Sentencia Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. 15 de septiembre de 2005.

_____. (2006). Sentencia Caso de la Masacre de Pueblo Bellos vs. Colombia. 31 de enero de 2006.

_____. (2008). Sentencia Caso de las masacres de Ituango y Caso Valle Jaramillo y oros vs. Colombia. 27 de noviembre de 2008.

_____. (2012). Sentencia Caso Masacre de el Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 25 de Octubre de 2012.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia No. SP 16258-2015, Radicación No. 45463. M.P. José Luis Barceló.

López, C. (2010). Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. Bogotá: Debate.

Manzini, V. (1951). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires: EJEA.

United Nations What is Transitional Justice A Backgrounder (2008). María del Rosario González de Lemos y Miguel Samper Strouss. En: Coloquio Internacional - Retos de Justicia y Paz. Bogotá: 17 de Febrero del 2011. Forer, Andre.

Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (2014). Sentencia Alternativa contra Salvatore Mancuso. Radicado 11001600253200680008, NI. 1821. 31 de octubre de 2014.

_____. (2014). Sentencia Alternativa contra Salvatore Mancuso. Radicado 110012252000201400027. 20 de noviembre de 2014.

Velásquez, E. (2007). Historia del paramilitarismo en Colombia. Revista Historia: Sao Pablo. Volumen 26, pp. 134-153.

Notas de prensa:

RCN. (12 de agosto de 2020). Exparamilitar-vuelve-senalar-uribe-como-maximo-referente-político-de-las-auc. Disponible en: <https://www.rcnradio.com/judicial/>

Verdad Abierta. (13 de mayo de 2010). Las confesiones de los jefes ‘paras’ extraditados. *Verdad Abierta*. Disponible en: <https://verdadabierta.com/las-confesiones-de-los-jefes-paras-extraditados/>

López, J. (28 de julio de 2020). Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación. *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/balance-de-los-15-anos-de-la-ley-de-justicia-y-paz-que-juzgo-a-los-paramilitares-522192>